


SKANDIA / CONTESTACIÓN DE DEMANDA / 76001310501720230036900

Diana Gomez <dgomez@godoycordoba.com>

Jue 02/11/2023 10:08

Para: Juzgado 17 Laboral - Valle del Cauca - Cali <j17lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Sol Angelica <procesos@tiradoescobar.com>

 1 archivos adjuntos (11 MB)

GCL 02 11 2023 DGF (CD) (2023-369) + A.pdf;

Señor(a)

JUEZ DIECISIETE (17) LABORAL DEL CIRCUITO DE CALIj17lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

REFERENCIA. Proceso Ordinario Laboral de **NADYA TERESA GONZALEZ CORTES** contra **SKANDIA ADMIISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.**

RADICACIÓN. 76001310501720230036900.

ASUNTO. Contestación de la demanda, llamamiento en garantía e incidente de nulidad por **SKANDIA ADMIISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.**

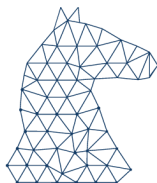
DIANA ESPERANZA GÓMEZ FONSECA, identificada como aparece al pie de mi antefirma, en mi condición de abogada inscrita en el certificado de existencia y representación legal de **GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.**, persona jurídica que actúa en condición de apoderada especial de **SKANDIA ADMIISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.**, parte demandada dentro del proceso de la referencia, de acuerdo con el poder y el certificado de representación, remito en adjunto el escrito de contestación de la demanda junto a las pruebas y los respectivos anexos.

Dando cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2213 de 2022, y en el numeral 14 del art. 78 del CGP, se remite el presente memorial con copia a las siguientes direcciones electrónicas:

1. Parte demandante: procesos@tiradoescobar.com

Por último, para efectos de notificaciones las recibiré en los correos electrónicos notificaciones@godoycordoba.com y dgomez@godoycordoba.com este último debidamente inscrito en el Registro Nacional de Abogados.

Del señor juez,

**Diana Gómez Fonseca**

C.C. 1.023.967.512 de Bogotá.

L.T. 30.201 del C.S. de la J.

dgomez@godoycordoba.com

Bogotá · Av. Calle 84A # 10-33, piso 5

Cel: 311-810-0969

PBX: (60-1) 317 4628

www.godoycordoba.com

Bogotá | Barranquilla | Cali | Medellín



Godoy Cordoba Abogados forma parte de la práctica de derecho internacional Littler Global, que opera en todo el mundo a través de una serie de entidades jurídicas independientes. Para obtener más información, visite: www.Littler.com

Señores

JUZGADO DIECISIETE (17) LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI

j17lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

REFERENCIA. Proceso Ordinario Laboral de **NADYA TERESA GONZALEZ CORTES** contra **SKANDIA ADMIISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.**

RADICACIÓN. 76001310501720230036901.

ASUNTO. Contestación de demanda **SKANDIA ADMIISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.**

DIANA ESPERANZA GÓMEZ FONSECA, identificada como aparece al pie de mi correspondiente antefirma, en mi condición de abogada inscrita en el certificado de existencia y representación legal de **GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.**, persona jurídica que actúa en condición de apoderada especial de la **SKANDIA ADMIISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.**, parte demandada dentro del proceso de la referencia, de acuerdo con el poder especial conferido por escritura pública, el cual se allega con el presente escrito, y en virtud del cual solicito reconocimiento de personería para actuar, doy contestación a la demanda que dio origen al proceso de la referencia, en los siguientes términos:

I. EN CUANTO A LOS HECHOS.

Al 1.	Es cierto.
Al 2.	No me consta , como quiera que se trata de un hecho que se encuentra relacionado con un tercero ajeno a mi representada, como lo es Colpensiones, por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 3.	No me consta , como quiera que se trata de un hecho que se encuentra relacionado con un tercero ajeno a mi representada, como lo es Colpensiones, por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 4.	No me consta , como quiera que se trata de un hecho que se encuentra relacionado con un tercero ajeno a mi representada, como lo es Colfondos S.A., por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 5.	No me consta , como quiera que se trata de un hecho que se encuentra relacionado con un tercero ajeno a mi representada, como lo es Porvenir S.A., por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 6.	No me consta , como quiera que se trata de un hecho que se encuentra relacionado con un tercero ajeno a mi representada, como lo es Protección S.A., por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 7.	No me consta , como quiera que se trata de un hecho que se encuentra relacionado con un tercero ajeno a mi representada, como lo es Porvenir S.A., por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 8.	No es cierto como se presenta , pues es de resaltar que, las gestiones que antecedieron la afiliación fueron realizadas por Skandia S.A. atendiendo a las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993, y sus Decretos reglamentarios.

Av. Calle 84A # 10-33, Piso 11 | Bogotá D.C., Colombia

PBX: (57-1) 317 4628 | www.godoycordoba.com



	<p>Al tenor de lo dispuesto en el literal b. del artículo 13 de la citada ley, la selección de uno cualquiera de los regímenes pensionales, "Prima Media con Prestación Definida o Ahorro Individual con Solidaridad" es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. En el mismo sentido, el artículo 6º del Decreto 228 de 19952 consagra que la elección de entidad Administradora de Fondos de Pensiones, se realiza mediante el diligenciamiento del formulario por parte del afiliado frente al empleador o frente a la Administradora de Fondos de Pensiones.</p> <p>Igualmente habrá que señalarse que del traslado de régimen pensional y de conformidad con el artículo 15 del Decreto 692 de 1994, la vinculación a una administradora de pensiones se realizará mediante el diligenciamiento del formulario.</p> <p>Por último, no sobra señalar que el deber de doble asesoría para determinar la conveniencia de pertenecer a uno u otro régimen pensional o el valor estimado de la mesada pensional, solamente fue instituida por el legislador en el año 2014, con la expedición de la Ley 1748, en la que se señaló:</p> <p>"En desarrollo de lo anterior, las Administradoras del Sistema General de Pensiones deberán garantizar que los clientes que quieran trasladarse entre regímenes pensionales reciban asesoría de representantes de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado entre regímenes. Lo anterior de conformidad con las instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia Financiera de Colombia."</p>
Al 9.	Es cierto.
Al 10.	No me consta , como quiera que se trata de un hecho que se encuentra relacionado con un tercero ajeno a mi representada, como lo es Colpensiones como administradora del RPM, por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 11.	Es cierto.
Al 12.	Es cierto.
Al 13.	Es cierto.
Al 14.	<p>No es cierto como se presenta, pues es de resaltar que, las gestiones que antecedieron la afiliación fueron realizadas por Skandia S.A. atendiendo a las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993, y sus Decretos reglamentarios.</p> <p>Al tenor de lo dispuesto en el literal b. del artículo 13 de la citada ley, la selección de uno cualquiera de los regímenes pensionales, "Prima Media con Prestación Definida o Ahorro Individual con Solidaridad" es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. En el mismo sentido, el artículo 6º del Decreto 228 de 19952 consagra que la elección de entidad Administradora de Fondos de Pensiones, se realiza mediante el diligenciamiento del formulario por parte del afiliado frente al empleador o frente a la Administradora de Fondos de Pensiones.</p> <p>Igualmente habrá que señalarse que del traslado de régimen pensional y de</p>



	<p>conformidad con el artículo 15 del Decreto 692 de 1994, la vinculación a una administradora de pensiones se realizará mediante el diligenciamiento del formulario.</p> <p>Por último, no sobra señalar que el deber de doble asesoría para determinar la conveniencia de pertenecer a uno u otro régimen pensional o el valor estimado de la mesada pensional, solamente fue instituida por el legislador en el año 2014, con la expedición de la Ley 1748, en la que se señaló:</p> <p>“En desarrollo de lo anterior, las Administradoras del Sistema General de Pensiones deberán garantizar que los clientes que quieran trasladarse entre regímenes pensionales reciban asesoría de representantes de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado entre regímenes. Lo anterior de conformidad con las instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia Financiera de Colombia.”</p>
Al 15.	No me consta , como quiera que se trata de un hecho que se encuentra relacionado con un tercero ajeno a mi representada, como lo es Protección S.A., por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 16.	No me consta , como quiera que se trata de un hecho que se encuentra relacionado con un tercero ajeno a mi representada, como lo es Protección S.A., por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 17.	No me consta , como quiera que se trata de un hecho que se encuentra relacionado con un tercero ajeno a mi representada, como lo es Colfondos S.A., por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 18.	No me consta , como quiera que se trata de un hecho que se encuentra relacionado con un tercero ajeno a mi representada, como lo es Protección S.A., por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 19.	No me consta , como quiera que se trata de un hecho que se encuentra relacionado con un tercero ajeno a mi representada, como lo es Porvenir S.A., por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 20.	No me consta , como quiera que se trata de un hecho que se encuentra relacionado con un tercero ajeno a mi representada, como lo es Porvenir S.A., por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 21.	No me consta , como quiera que se trata de un hecho que se encuentra relacionado con un tercero ajeno a mi representada, como lo es Colpensiones como administradora del RPM, por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 22.	No me consta , como quiera que se trata de un hecho que se encuentra relacionado con un tercero ajeno a mi representada, como lo es Colpensiones como administradora del RPM, por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 23.	No es cierto , debe indicarse que la anotación en el formulario de afiliación en la cual se deja la constancia de que el actor suscribió el formulario de afiliación si es constancia de la voluntariedad de la demandante para vincularse al RAIS, como quiera la suscripción del formulario de afiliación fue precedida por una asesoría clara, veraz y oportuna frente a la cual <u>no se manifestó de manera verbal como tampoco escrita</u> , algún tipo de desacuerdo o inconformidad con lo allí presentado, máxime cuando su firma se plasmó en el campo donde igualmente



	<p>se señala esta voluntariedad y de la cual, en virtud de los principios contractuales y la autonomía de la voluntad privada, la aquí demandante estaba de acuerdo con lo allí señalado.</p> <p>Además, si lo que arguye la demandante es la existencia de un vicio del consentimiento, le competía acreditar los supuestos en los que se funda. Así las cosas, se debe señalar que, de acuerdo con los documentos aportados no se logra evidenciar soporte alguno que permita acreditar la existencia de error, fuerza o dolo.</p>
Al 24.	<p>No es cierto, debe indicarse que la anotación en el formulario de afiliación en la cual se deja la constancia de que el actor suscribió el formulario de afiliación si es constancia de la voluntariedad de la demandante para vincularse al RAIS, como quiera la suscripción del formulario de afiliación fue precedida por una asesoría clara, veraz y oportuna frente a la cual <u>no se manifestó de manera verbal como tampoco escrita</u>, algún tipo de desacuerdo o inconformidad con lo allí presentado, máxime cuando su firma se plasmó en el campo donde igualmente se señala esta voluntariedad y de la cual, en virtud de los principios contractuales y la autonomía de la voluntad privada, la aquí demandante estaba de acuerdo con lo allí señalado.</p> <p>Además, si lo que arguye la demandante es la existencia de un vicio del consentimiento, le competía acreditar los supuestos en los que se funda. Así las cosas, se debe señalar que, de acuerdo con los documentos aportados no se logra evidenciar soporte alguno que permita acreditar la existencia de error, fuerza o dolo.</p>
Al 25.	<p>No me consta, como quiera que se trata de un hecho que se encuentra relacionado con un tercero ajeno a mi representada, como lo es Colpensiones como administradora del RPM, por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe dentro del proceso.</p>
Al 26.	<p>No me consta, como quiera que se trata de un hecho que se encuentra relacionado con un tercero ajeno a mi representada, como lo es Colpensiones como administradora del RPM, por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe dentro del proceso.</p>
Al 26.1.	<p>No me consta, como quiera que se trata de un hecho que se encuentra relacionado con un tercero ajeno a mi representada, como lo es Colpensiones como administradora del RPM, por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe dentro del proceso.</p>
Al 26.2.	<p>No me consta, como quiera que se trata de un hecho que se encuentra relacionado con un tercero ajeno a mi representada, como lo es Colpensiones como administradora del RPM, por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe dentro del proceso.</p>
Al 27.	<p>No es cierto como se presenta, pues es de resaltar que, las gestiones que antecedieron la afiliación fueron realizadas por Skandia S.A. atendiendo a las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993, y sus Decretos reglamentarios.</p> <p>Al tenor de lo dispuesto en el literal b. del artículo 13 de la citada ley, la selección de uno cualquiera de los regímenes pensionales, "Prima Media con Prestación Definida o Ahorro Individual con Solidaridad" es libre y voluntaria por parte del</p>



	<p>afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. En el mismo sentido, el artículo 6º del Decreto 228 de 19952 consagra que la elección de entidad Administradora de Fondos de Pensiones, se realiza mediante el diligenciamiento del formulario por parte del afiliado frente al empleador o frente a la Administradora de Fondos de Pensiones.</p> <p>Igualmente habrá que señalarse que del traslado de régimen pensional y de conformidad con el artículo 15 del Decreto 692 de 1994, la vinculación a una administradora de pensiones se realizará mediante el diligenciamiento del formulario.</p> <p>Por último, no sobra señalar que el deber de doble asesoría para determinar la conveniencia de pertenecer a uno u otro régimen pensional o el valor estimado de la mesada pensional, solamente fue instituida por el legislador en el año 2014, con la expedición de la Ley 1748, en la que se señaló:</p> <p>“En desarrollo de lo anterior, las Administradoras del Sistema General de Pensiones deberán garantizar que los clientes que quieran trasladarse entre regímenes pensionales reciban asesoría de representantes de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado entre regímenes. Lo anterior de conformidad con las instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia Financiera de Colombia.”</p>
--	---

II. FRENTE A LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS:

Me opongo a todas y cada una de las peticiones formuladas en la demanda que pretenda hacer recaer en mi representada cualquier tipo de consecuencia jurídica y/o económica en virtud del presente proceso y solicito al Despacho absuelva de todas y cada una de ellas a **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**, por las razones que se expondrán en las excepciones de la defensa, así como frente a cada hecho y pretensión particular.

- FRENTE A LAS PRETENSIONES PRINCIPALES:



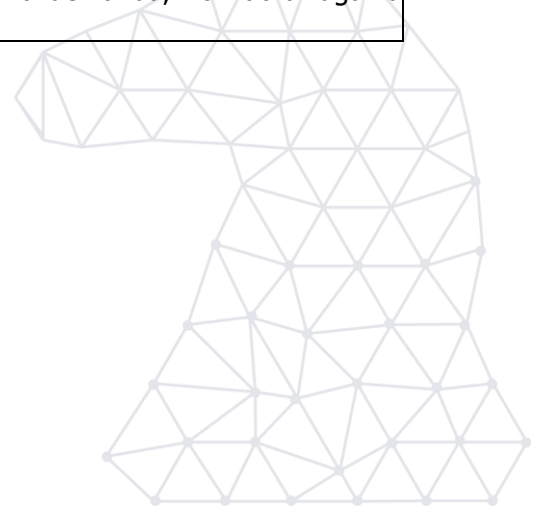
A la 1.	<p>Me opongo. Si bien, la demandante alega una falencia en la información entregada, debe tenerse en cuenta que la estructura y condiciones del RPM y del RAIS se encuentran cabalmente estipuladas en la Ley 100 de 1993 y las demás normas complementarias, por lo que no resulta plausible que la demandante alegue que no fue asesorada de manera completa, veraz, oportuna, adecuada, suficiente y clara sobre las diferencias de los regímenes, los beneficios y desventajas al momento de suscribir los diferentes formularios de afiliación.</p> <p>Se llama la atención del Despacho, en cuanto que la demandante, lo que está haciendo es alegar la propia culpa en su beneficio, pues es indispensable manifestar que contaba con las condiciones necesarias y suficientes para verificar, corroborar y ampliar la información otorgada por parte de los fondos a los que ha estado vinculada.</p> <p>Así mismo, es indispensable señalar que no es viable que la demandante alegue hoy, muchos años con posterioridad a su traslado inicial de régimen pensional y tras realizar múltiples traslados horizontales, la voluntad de retornar al RPM, cuando teniendo la posibilidad de ejercer su derecho al retracto no lo hizo.</p> <p>La anterior postura se encuentra válidamente respaldada por jurisprudencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en sentencia del 10 de septiembre de 2012, en la que se señaló:</p> <p>“Pero, como si lo anterior fuera poco, ante la clara sindicación de la actora de haber sufrido engaño por parte de la A.F.P. Porvenir S.A., esto es endilgarle dolo en su actuar, frente al expreso mandato legal contenido en el artículo 1516 del código civil, no cabe duda que debió probar su afirmación, lo que no se observa que hubiese ocurrido, pues en el expediente no hay prueba en tal sentido.</p> ”
----------------	---

	<p>Finalmente resulta del caso notar que, tampoco estaba llamada a prosperar la pretensión con base en la jurisprudencia traída a colación por el Juzgado, pues ésta contempla unos supuestos de hecho totalmente diferentes a los del presente caso, en cuanto el allí demandante para el momento del traslado ya había reunido los requisitos para pensionarse en el régimen de prima media con prestación definida, lo que de suyo le representaba un perjuicio actual evidente, situación que no se percibe en el presente asunto, en el que múltiples motivos pudieron haber movido la voluntad de la accionante para preferir el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, sin que, para el momento en que lo hizo se perciba de manera manifiesta el acaecimiento de un perjuicio evidente (...)."</p> <p>Ahora bien, en cuanto al posible vicio del consentimiento a razón del error, será necesario señalar que existen errores de hecho y de derecho.</p> <p>Con relación al primero, se tiene que será un error de hecho en aquellos casos en los que se yerra en cuanto a la especie del acto o contrato, así como la identidad de la cosa específica. Así las cosas, en el caso objeto de análisis el error de hecho no se configura, en la medida en la que la demandante era consciente de que estaba realizando un traslado de régimen pensional. Así mismo, debe tenerse en cuenta que, con posterioridad al traslado al RAIS la demandante no sólo continuó realizando aportes a seguridad social en pensiones en dicho régimen, sino que, además, según ella misma, realizó múltiples traslados entre Fondos Administradores de pensiones del RAIS.</p> <p>En cuanto al error de derecho, se debe indicar que, aun cuando sería la figura que mejor aplicaría al caso en concreto, pues según las alegaciones de la demandante, si bien era consciente que lo que estaba llevando a cabo era el traslado de régimen, desconocía las condiciones del RAIS y sus consecuencias, de manera que, en últimas, ello no implicaría otra cosa que desconocimiento de una figura legal. En este punto se debe señalar que, aun cuando pareciera que esta es la figura aplicable al caso lo cierto es que los artículos 9 y 1509 del Código Civil indican que el desconocimiento de la ley no sirve de excusa y que el error de derecho no vicia el consentimiento.</p>
A la 2.	<p>Me opongo, en tanto que la demandante a la fecha se encuentra PENSIONADA con mi representada, luego es claro que la Corte Suprema de Justicia en su sentencia SL 373 de 2021, ha establecido que si bien por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado, lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso, ya que no se puede borrar la calidad de pensionado sin más, ya que ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema general en pensiones en todo su conjunto.</p>



A la 3.	Me opongo , en tanto que la demandante a la fecha se encuentra PENSIONADA con mi representada, luego es claro que la Corte Suprema de Justicia en su sentencia SL 373 de 2021, ha establecido que si bien por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado, lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso, ya que no se puede borrar la calidad de pensionado sin más, ya que ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema general en pensiones en todo su conjunto.
A la 4.	Ni me opongo ni me allano , como quiera que el presente numeral se encuentra dirigido a un tercero a ajeno a mi representada, como lo es el Ministerio de Hacienda, en igual sentido las administradoras del régimen de ahorro individual son las intermediarias administrativamente respecto de la redención del bono pensional por parte del Ministerio hacia el afiliado.
A la 5.	Me opongo , pues es necesario aclarar que el traslado de régimen pensional realizado por la demandante al RAIS, así como los posteriores traslados horizontales son completamente válidos, ya que estuvieron precedidos de una asesoría oportuna, profesional, informada y ajustada a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto No. 663 de 1993. Respecto de la devolución de los rendimientos que se hubieren causado y los gastos de administración resulta improcedente por lo siguiente:

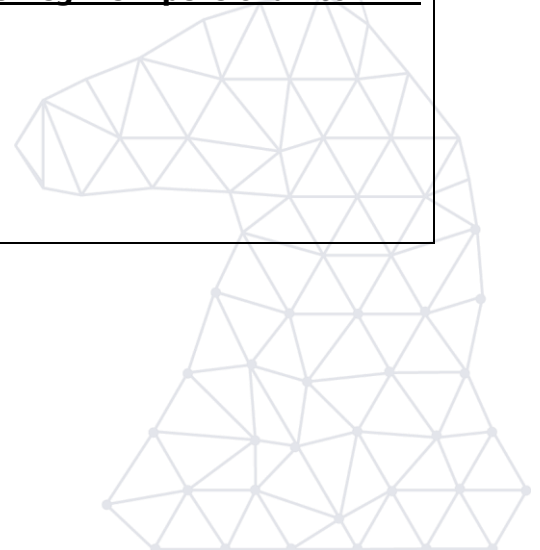
	<p>En atención al tiempo en el que estuvo afiliado el demandante al RAIS, mi representada no sólo aceptó los aportes realizados, sino que, por demás se encargó de administrarlo de manera efectiva, lo que trajo de suyo la generación de rendimientos económicos.</p> <p>Pretender la devolución de los gastos de administración y de rendimientos económicos supone que, a pesar de solicitar la ineficacia de la afiliación, sí se quiere dejar en firme lo que durante la afiliación se generó, esto es, los rendimientos económicos, lo que contraría la figura misma de la ineficacia y redundaría en un pago de lo no debido y un enriquecimiento sin causa.</p> <p>Asimismo, es de aclarar que la solicitud de devolución de los rendimientos financieros obtenidos en el Régimen de Ahorro Individual desborda los efectos de la ineficacia, dado que su consecuencia jurídica “es declarar que el negocio jurídico no se ha celebrado jamás”, tal como lo manifestó la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC-3201-2018. En tal medida, los rendimientos financieros, al ser privativos del Régimen de Ahorro Individual, pondrían al demandante en una condición diferente a la que se encontraba al pertenecer al Régimen de Prima Media.</p> <p>Ahora bien, en caso de que se accediera a declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional, la devolución de los gastos administrativos, los rendimientos financieros, y demás gastos, dejaría al demandante en una situación más favorable que la que tendría de haber permanecido en el Régimen de Prima Media, dado que recibiría dineros que no se generan en este régimen pensional, en clara contravención a lo establecido en el artículo 897 del Código de Comercio.</p> <p>De ahí que no es procedente ordenar a Skandia a trasladar los aportes realizados por la accionante junto con los rendimientos al RPM administrado por Colpensiones.</p>
A la 6.	Me opongo, en la medida que mi representada deberá ser absuelta de todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda, no habrá lugar a cualquier condena ultra o extra petita.
A la 7.	Me opongo, en la medida que mi representada deberá ser absuelta de todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda, no habrá lugar a cualquier condena en costas.



- **FRENTE A LAS PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:**

<p>A la 1.</p>	<p>Me opongo, que mi representada en caso hipotético resulte responsable por algún tipo de creación de daños o perjuicios a la parte actora, toda vez que esta cumplió de manera cabal cada una de sus obligaciones en materia de información al momento del traslado de régimen efectuado.</p> <p>Vale la pena mencionar que corresponde a la demandante probar el perjuicio reclamado, sin embargo, en el proceso NO existe prueba si quiera sumaria de los supuestos perjuicios; simplemente existe una manifestación de diferencias entre las mesadas pensionales que se tendría en el RAIS y la que se tendría en el RPM, situación que por sí sola NO es suficiente para dar por acreditado un perjuicio.</p> <p>Lo anterior sustentado de conformidad con la sentencia de radicado 2020-00252 de la Sala Tercera de decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín:</p> <p>“una conclusión desafortunada del juzgador de prima instancia, pues con esta se desconoce la estructura y el funcionamiento del régimen de capitalización, pues esos dineros acumulados en la cuenta de ahorro</p>
-----------------------	--

	<p>individual, siempre estuvieron sujetos a los rendimientos financieros y a los vaivenes de la economía, durante todo el tiempo en que la actora estuvo afiliado a los fondos privados de pensiones, de donde se concluye que la consolidación de ese capital necesario para financiar la pensión de vejez, se vio afectado por variables micro y macroeconómicas, como es el caso de la inflación, las inversiones, rentabilidades, utilidades, inclusive la posibilidad que tenía la actora de realizar aportes voluntarios, (...) variables y factores que no le son atribuibles en su totalidad al fondo privado de pensiones.”</p> <p>En ese orden de ideas aludir una responsabilidad patrimonial a partir de las distintas fórmulas aplicadas para liquidar la pensión de vejez en el RAIS y en RPM equivaldría a <u>desconocer la constitucionalidad y legalidad de ambos regímenes</u>, por cuanto los regímenes pensionales existentes en Colombia cuentan con regulación propia y fuentes de financiación diferentes, tal y como lo ha advertido la jurisprudencia Constitucional.</p> <p><u>Ahora bien, se llama la atención del despacho en cuanto que la demandante no realizó el traslado de régimen pensional con mi representada.</u></p>
<p>A la 2.</p>	<p>Me opongo, que mi representada en caso hipotético resulte responsable por algún tipo de creación de daños o perjuicios a la parte actora, toda vez que esta cumplió de manera cabal cada una de sus obligaciones en materia de información al momento del traslado de régimen efectuado.</p> <p>Vale la pena mencionar que corresponde a la demandante probar el perjuicio reclamado, sin embargo, en el proceso NO existe prueba si quiera sumaria de los supuestos perjuicios; simplemente existe una manifestación de diferencias entre las mesadas pensionales que se tendría en el RAIS y la que se tendría en el RPM, situación que por sí sola NO es suficiente para dar por acreditado un perjuicio.</p> <p><u>Ahora bien, se llama la atención del despacho en cuanto que la demandante no realizó el traslado de régimen pensional con mi representada.</u></p>





A la 3.	<p>Me opongo, en la medida en que mi representada no resulta responsable por ningún tipo de creación de daños o perjuicios a la parte actora, toda vez que esta cumplió de manera cabal cada una de sus obligaciones en materia de información al momento del traslado de régimen efectuado. Igualmente, debe destacarse que, no puede asegurarse un perjuicio cuando mi representada actuó de manera diligente al administrar los dineros aportados por la demandante y así generar una serie de rendimientos a los cuales hoy tiene derecho y se utilizaron para financiar su pensión.</p> <p><u>Ahora bien, se llama la atención del despacho en cuanto que la demandante no realizó el traslado de régimen pensional con mi representada.</u></p> <p>Ahora bien, y teniendo en cuenta que corresponde a la demandante probar el perjuicio reclamado, en el proceso NO existe prueba si quiera sumaria de los supuestos perjuicios; simplemente existe una diferencia entre la mesada pensional que se tendría en el RAIS y la que se tendría en el RPM, situación que por sí sola no es suficiente para dar por acreditado un perjuicio. Lo anterior también sustentado de conformidad con la Sentencia de radicado 2020-00252 de la Sala tercera (03ª) de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, que concluye que:</p> <p>“asumir que eventualmente la mesada pensional entre el RAIS y el RPM es culpa de LA AFP resulta una conclusión desafortunada del juzgador de prima instancia, pues con esta se desconoce la estructura y el funcionamiento del régimen de capitalización, pues esos dineros</p>
----------------	--



	<p>acumulados en la cuenta de ahorro individual, siempre estuvieron y legalidad de ambos regímenes, por cuanto los regímenes pensionales sujetos a los rendimientos financieros y a los vaivenes de la economía, durante todo el tiempo en que la actora estuvo afiliado a los fondos privados de pensiones, de donde se concluye que la consolidación de ese capital necesario para financiar la pensión de vejez, se vio afectado por variables micro y macroeconómicas, como es el caso de la inflación, las inversiones, rentabilidades, utilidades, inclusive la posibilidad que tenía la actora de realizar aportes voluntarios, (...) variables y factores que no le son atribuibles en su totalidad al fondo privado de pensiones.”</p> <p>Es decir, deducir una responsabilidad patrimonial a partir de las distintas fórmulas aplicadas para liquidar la pensión de vejez en el RAIS y en RPM equivaldría a desconocer la constitucionalidad existentes en Colombia cuentan con regulación propia y fuentes de financiación diferentes, tal y como lo ha advertido la jurisprudencia Constitucional.</p>
A la 4.	<p>Me opongo, en la medida en que mi representada no resulta responsable por ningún tipo de creación de daños o perjuicios a la parte actora, toda vez que esta cumplió de manera cabal cada una de sus obligaciones en materia de información al momento del traslado de régimen efectuado. Igualmente, debe destacarse que, no puede asegurarse un perjuicio cuando mi representada actuó de manera diligente al administrar los dineros aportados por la demandante y así generar una serie de rendimientos a los cuales hoy tiene derecho y se utilizaron para financiar su pensión.</p> <p><u>Ahora bien, se llama la atención del despacho en cuanto que la demandante no realizó el traslado de régimen pensional con mi representada.</u></p> <p>Ahora bien, y teniendo en cuenta que corresponde a la demandante probar el perjuicio reclamado, en el proceso NO existe prueba si quiera sumaria de los supuestos perjuicios; simplemente existe una diferencia entre la mesada pensional que se tendría en el RAIS y la que se tendría en el RPM, situación que por sí sola no es suficiente para dar por acreditado un perjuicio. Lo anterior también sustentado de conformidad con la Sentencia de radicado 2020-00252 de la Sala tercera (03ª) de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, que concluye que:</p> <p>“asumir que eventualmente la mesada pensional entre el RAIS y el RPM es culpa de LA AFP resulta una conclusión desafortunada del juzgador de prima instancia, pues con esta se desconoce la estructura y el funcionamiento del régimen de capitalización, pues esos dineros acumulados en la cuenta de ahorro individual, siempre estuvieron y legalidad de ambos regímenes, por cuanto los regímenes pensionales sujetos a los rendimientos financieros y a los vaivenes de la economía, durante todo el tiempo en que la actora estuvo afiliado a los fondos privados de pensiones, de donde se concluye que la consolidación de</p>



	<p>ese capital necesario para financiar la pensión de vejez, se vio afectado por variables micro y macroeconómicas, como es el caso de la inflación, las inversiones, rentabilidades, utilidades, inclusive la posibilidad que tenía la actora de realizar aportes voluntarios, (...) variables y factores que no le son atribuibles en su totalidad al fondo privado de pensiones.”</p> <p>Es decir, deducir una responsabilidad patrimonial a partir de las distintas fórmulas aplicadas para liquidar la pensión de vejez en el RAIS y en RPM equivaldría a desconocer la constitucionalidad existentes en Colombia cuentan con regulación propia y fuentes de financiación diferentes, tal y como lo ha advertido la jurisprudencia Constitucional.</p>
A la 5.	<p>Me opongo, en la medida en que mi representada no resulta responsable por ningún tipo de creación de daños o perjuicios a la parte actora, toda vez que esta cumplió de manera cabal cada una de sus obligaciones en materia de información al momento del traslado de régimen efectuado. Igualmente, debe destacarse que, no puede asegurarse un perjuicio cuando mi representada actuó de manera diligente al administrar los dineros aportados por la demandante y así generar una serie de rendimientos a los cuales hoy tiene derecho y se utilizaron para financiar su pensión.</p> <p><u>Ahora bien, se llama la atención del despacho en cuanto que la demandante no realizó el traslado de régimen pensional con mi representada.</u></p> <p>Ahora bien, y teniendo en cuenta que corresponde a la demandante probar el perjuicio reclamado, en el proceso NO existe prueba si quiera sumaria de los supuestos perjuicios; simplemente existe una diferencia entre la mesada pensional que se tendría en el RAIS y la que se tendría en el RPM, situación que por sí sola no es suficiente para dar por acreditado un perjuicio. Lo anterior también sustentado de conformidad con la Sentencia de radicado 2020-00252 de la Sala tercera (03ª) de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, que concluye que:</p> <p>“asumir que eventualmente la mesada pensional entre el RAIS y el RPM es culpa de LA AFP resulta una conclusión desafortunada del juzgador de prima instancia, pues con esta se desconoce la estructura y el funcionamiento del régimen de capitalización, pues esos dineros acumulados en la cuenta de ahorro individual, siempre estuvieron y legalidad de ambos regímenes, por cuanto los regímenes pensionales sujetos a los rendimientos financieros y a los vaivenes de la economía, durante todo el tiempo en que la actora estuvo afiliado a los fondos privados de pensiones, de donde se concluye que la consolidación de ese capital necesario para financiar la pensión de vejez, se vio afectado por variables micro y macroeconómicas, como es el caso de la inflación, las inversiones, rentabilidades, utilidades, inclusive la posibilidad que tenía la actora de realizar aportes voluntarios, (...) variables y factores que no le son atribuibles en su totalidad al fondo privado de pensiones.”</p> <p>Es decir, deducir una responsabilidad patrimonial a partir de las distintas</p>



	<p>fórmulas aplicadas para liquidar la pensión de vejez en el RAIS y en RPM equivaldría a desconocer la constitucionalidad existentes en Colombia cuentan con regulación propia y fuentes de financiación diferentes, tal y como lo ha advertido la jurisprudencia Constitucional.</p>
A la 6.	<p>Me opongo, en la medida en que mi representada no resulta responsable por ningún tipo de creación de daños o perjuicios a la parte actora, toda vez que esta cumplió de manera cabal cada una de sus obligaciones en materia de información al momento del traslado de régimen efectuado. Igualmente, debe destacarse que, no puede asegurarse un perjuicio cuando mi representada actuó de manera diligente al administrar los dineros aportados por la demandante y así generar una serie de rendimientos a los cuales hoy tiene derecho y se utilizaron para financiar su pensión.</p> <p><u>Ahora bien, se llama la atención del despacho en cuanto que la demandante no realizó el traslado de régimen pensional con mi representada.</u></p> <p>Ahora bien, y teniendo en cuenta que corresponde a la demandante probar el perjuicio reclamado, en el proceso NO existe prueba si quiera sumaria de los supuestos perjuicios; simplemente existe una diferencia entre la mesada pensional que se tendría en el RAIS y la que se tendría en el RPM, situación que por sí sola no es suficiente para dar por acreditado un perjuicio. Lo anterior también sustentado de conformidad con la Sentencia de radicado 2020-00252 de la Sala tercera (03ª) de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, que concluye que:</p> <p>“asumir que eventualmente la mesada pensional entre el RAIS y el RPM es culpa de LA AFP resulta una conclusión desafortunada del juzgador de prima instancia, pues con esta se desconoce la estructura y el funcionamiento del régimen de capitalización, pues esos dineros acumulados en la cuenta de ahorro individual, siempre estuvieron y legalidad de ambos regímenes, por cuanto los regímenes pensionales sujetos a los rendimientos financieros y a los vaivenes de la economía, durante todo el tiempo en que la actora estuvo afiliado a los fondos privados de pensiones, de donde se concluye que la consolidación de ese capital necesario para financiar la pensión de vejez, se vio afectado por variables micro y macroeconómicas, como es el caso de la inflación, las inversiones, rentabilidades, utilidades, inclusive la posibilidad que tenía la actora de realizar aportes voluntarios, (...) variables y factores que no le son atribuibles en su totalidad al fondo privado de pensiones.”</p> <p>Es decir, deducir una responsabilidad patrimonial a partir de las distintas fórmulas aplicadas para liquidar la pensión de vejez en el RAIS y en RPM equivaldría a desconocer la constitucionalidad existentes en Colombia cuentan con regulación propia y fuentes de financiación diferentes, tal y como lo ha advertido la jurisprudencia Constitucional.</p>

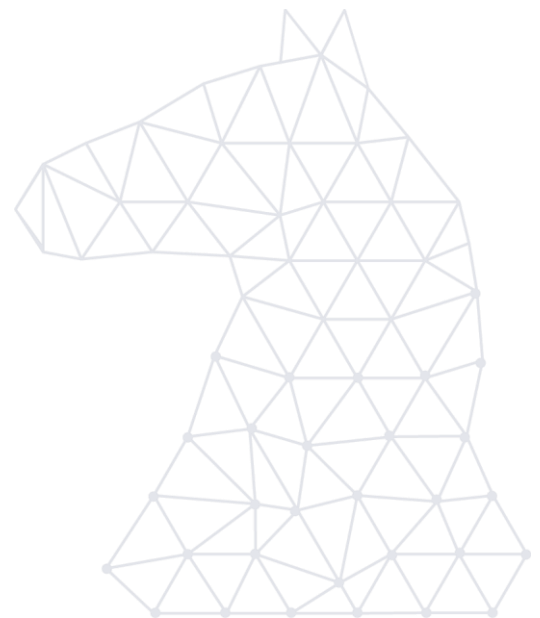


A la 7.	<p>Me opongo, en la medida en que mi representada no resulta responsable por ningún tipo de creación de daños o perjuicios a la parte actora, toda vez que esta cumplió de manera cabal cada una de sus obligaciones en materia de información al momento del traslado de régimen efectuado. Igualmente, debe destacarse que, no puede asegurarse un perjuicio cuando mi representada actuó de manera diligente al administrar los dineros aportados por la demandante y así generar una serie de rendimientos a los cuales hoy tiene derecho y se utilizaron para financiar su pensión.</p> <p><u>Ahora bien, se llama la atención del despacho en cuanto que la demandante no realizó el traslado de régimen pensional con mi representada.</u></p> <p>Ahora bien, y teniendo en cuenta que corresponde a la demandante probar el perjuicio reclamado, en el proceso NO existe prueba si quiera sumaria de los supuestos perjuicios; simplemente existe una diferencia entre la mesada pensional que se tendría en el RAIS y la que se tendría en el RPM, situación que por sí sola no es suficiente para dar por acreditado un perjuicio. Lo anterior también sustentado de conformidad con la Sentencia de radicado 2020-00252 de la Sala tercera (03ª) de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, que concluye que:</p> <p>“asumir que eventualmente la mesada pensional entre el RAIS y el RPM es culpa de LA AFP resulta una conclusión desafortunada del juzgador de prima instancia, pues con esta se desconoce la estructura y el funcionamiento del régimen de capitalización, pues esos dineros acumulados en la cuenta de ahorro individual, siempre estuvieron y legalidad de ambos regímenes, por cuanto los regímenes pensionales sujetos a los rendimientos financieros y a los vaivenes de la economía, durante todo el tiempo en que la actora estuvo afiliado a los fondos privados de pensiones, de donde se concluye que la consolidación de ese capital necesario para financiar la pensión de vejez, se vio afectado por variables micro y macroeconómicas, como es el caso de la inflación, las inversiones, rentabilidades, utilidades, inclusive la posibilidad que tenía la actora de realizar aportes voluntarios, (...) variables y factores que no le son atribuibles en su totalidad al fondo privado de pensiones.”</p> <p>Es decir, deducir una responsabilidad patrimonial a partir de las distintas fórmulas aplicadas para liquidar la pensión de vejez en el RAIS y en RPM equivaldría a desconocer la constitucionalidad existentes en Colombia cuentan con regulación propia y fuentes de financiación diferentes, tal y como lo ha advertido la jurisprudencia Constitucional.</p>
A la 8.	<p>Me opongo, en la medida que mi representada deberá ser absuelta de todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda, no habrá lugar a cualquier condena en costas.</p>

III. HECHOS, FUNDAMENTOS Y RAZONES DE LA DEFENSA

A continuación, se presentan los hechos, fundamentos y razones de la defensa de mi representada con base en los cuales se deberá proferir sentencia absolutoria atendiendo a que todos y cada uno de los hechos y pretensiones de la demanda quedarán plenamente desvirtuados.

1. DE LOS REGÍMENES PENSIONALES EN COLOMBIA Y SU DESARROLLO NORMATIVO.





La Ley 100 de 1993 creó dos (2) regímenes pensionales excluyentes entre sí, pero que coexisten en aras de garantizar la libre escogencia de los ciudadanos de afiliarse al uno o al otro. Por un lado, se creó un régimen de prima media el cual se caracteriza por tener una contribución y prestación definida previamente en la Ley. En este régimen los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo de naturaleza pública. Por otro lado, se creó el Régimen de Ahorro Individual (en adelante, "RAIS"), el cual se caracteriza porque los aportes de los afiliados no ingresan a un fondo común como en el de Prima Media, sino que son depositados en una cuenta individual de ahorro pensional, y la obtención de la prestación y su valor, dependen del capital que el afiliado logre ahorrar en su etapa laboral productiva, sin que sea necesario analizar circunstancias de semanas cotizadas o edad acumulada como sucede en el Régimen de Prima Media.

En efecto, el legislador al expedir la Ley 100 de 1993, optó por darle al ciudadano un papel sobresaliente en la planeación de su futuro pensional, pues en el literal b) del artículo 13 de la citada norma determinó que todos los ciudadanos pueden escoger libremente a cuál de los regímenes desean pertenecer. La disposición en comento establece:

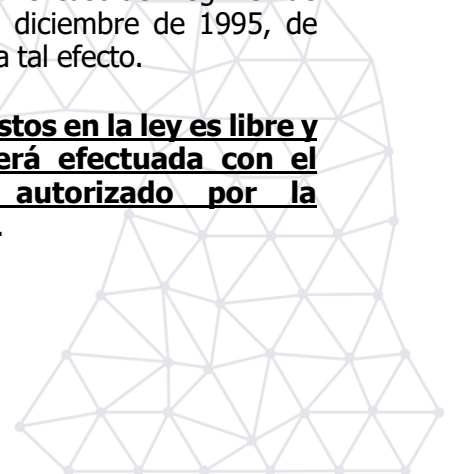
"b) La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado".

Ahora, en el contexto descrito anteriormente, los afiliados pueden escoger de manera libre y voluntaria a cuál de los regímenes se afilian, lo cual determina, a su vez, la modalidad de pensión. En este entendido, ningún ciudadano puede estar vinculado a los dos (2) regímenes coexistentes, por lo que se puede asumir que con la afiliación al Régimen de Prima Media con Prestación definida (RPMPD) o al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) el ciudadano escoge la manera en la que va a disfrutar de alguna de las prestaciones que ofrece el Sistema General de Pensiones.

La mencionada afiliación, en lo que toca al RAIS, por ser mi representada parte de dicho régimen, genera plenos efectos jurídicos desde la firma o suscripción del Formulario de Afiliación correspondiente a la parte actora. Lo anterior tiene como fundamento el artículo segundo del Decreto 1642 de 1995, que a la letra indica:

"ARTICULO 2o. AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. Los empleadores de que trata el artículo 1o. de este Decreto deben iniciar el proceso de afiliación de sus trabajadores, para que estos seleccionen tanto el régimen de pensiones, como la entidad administradora a la que deseen vincularse en el caso del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a más tardar el 31 de diciembre de 1995, de conformidad con los procedimientos legales establecidos para tal efecto.

La selección de cualquiera de los dos regímenes previstos en la ley es libre y voluntaria por parte del trabajador, y se entenderá efectuada con el diligenciamiento del formulario de afiliación autorizado por la Superintendencia Bancaria". (He resaltado y subrayado).





En lo atinente a las características que debe cumplir el Formulario de Afiliación en cualquiera de los Regímenes pensionales, el Decreto 1833 de 2016, en su artículo 2.2.2.1.8 dispone:

"ARTÍCULO 2.2.2.1.8. Diligenciamiento de la selección y vinculación. La selección del régimen implica la aceptación de las condiciones propias de éste para acceder a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y demás prestaciones económicas a que haya lugar.

La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos en el sistema general de pensiones es libre y voluntaria por parte del afiliado. Tratándose de trabajadores con vinculación contractual, legal o reglamentaria, la selección efectuada deberá ser informada por escrito al empleador al momento de la vinculación o cuando se traslade de régimen o de administradora, con el objeto de que éste efectúe las cotizaciones a que haya lugar.

Quienes decidan afiliarse voluntariamente al sistema, manifestarán su decisión al momento de vincularse a una determinada administradora.

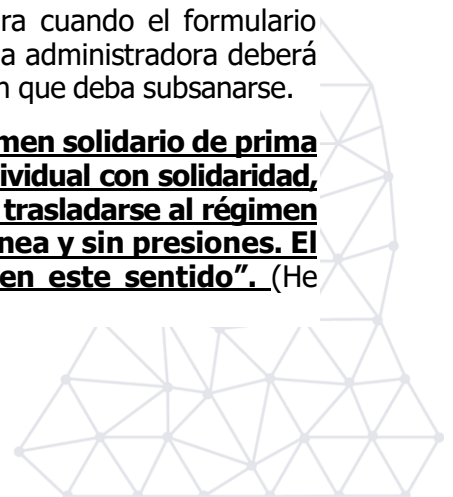
Efectuada la selección el empleador deberá adelantar el proceso de vinculación con la respectiva administradora, mediante el diligenciamiento de un formulario previsto para el efecto por la Superintendencia Financiera de Colombia, que deberá contener por lo menos los siguientes datos:

1. Lugar y fecha.
2. Nombre o razón social y NIT del empleador.
3. Nombre y apellidos del afiliado.
4. Número de cédula o NIT del afiliado.
5. Entidad administradora del régimen de pensiones a la cual desea afiliarse, la cual podrá estar preimpresa.
6. Datos del cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos o beneficiarios del afiliado.

El formulario deberá diligenciarse en original y dos copias, cuya distribución será la siguiente: el original para la administradora, una copia para el empleador y otra para el afiliado.

No se considerará válida la vinculación a la administradora cuando el formulario respectivo no contenga los anteriores datos, en cuyo caso la administradora deberá notificar al afiliado y a su respectivo empleador la información que deba subsanarse.

Cuando el afiliado se traslade por primera vez del régimen solidario de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, en el formulario deberá consignarse que la decisión de trasladarse al régimen seleccionado se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones. El formulario puede contener la leyenda preimpresa en este sentido". (He resaltado y subrayado).





También debe tenerse en cuenta que además de la libertad que tienen los ciudadanos para escoger el Régimen que administrará sus recursos pensionales, el artículo 112 de la Ley 100 de 1993, reglamentado por el artículo 5 del Decreto 692 de 1994; determinó la imposibilidad para las Administradoras de Fondos de Pensiones de rechazar cualquier solicitud de afiliación que reúna los requisitos expuestos anteriormente. El artículo 5 de ese ordenamiento preceptúa:

"ARTICULO 5o. REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD. En el régimen de ahorro individual con solidaridad, los afiliados tienen una cuenta individualizada, en la cual se abona el valor de sus cotizaciones y las de sus empleados, las cotizaciones voluntarias, los bonos pensionales y los subsidios del Estado si hubiere lugar a ellos, más todos los rendimientos financieros que genere la cuanta individual. (...).

Las personas que cumplan los requisitos para seleccionar el régimen de ahorro individual con solidaridad no podrán ser rechazadas por las administradoras del mismo". (He subrayado y Resaltado).

Aunado a lo regulado por el Decreto 1642 de 1995 y habida cuenta que al ciudadano se le dio un papel determinante en la planeación de su futuro pensional, la Ley 797 de 2003 determinó que, una vez efectuada la selección de régimen inicial, los ciudadanos podrán trasladarse de régimen pensional una vez cada cinco (5) años. Así mismo, impuso la prohibición de trasladarse de régimen pensional cuando faltaren menos de diez (10) años para acceder a la prestación. La norma traída a colación anteriormente expone:

"ARTÍCULO 2o. Se modifican los literales a), e), i), del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y se adiciona dicho artículo con los literales l), m), n), o) y p), todos los cuales quedarán así:

Artículo 13. Características del Sistema General de Pensiones.

(...)

e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por **una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez; (...).** (He resaltado y subrayado).

Entonces, como conclusión podemos afirmar que la afiliación de la demandante con mi representada mediante el Formulario de afiliación goza de plena validez ante la ley, por haberse cumplido con los requisitos que las distintas regulaciones e imponen a ese respecto.

Debe tenerse en cuenta, que en el caso que nos concierne la demandante realizó su traslado de régimen pensional con Porvenir, es decir, que la aquí demandante venía de estar afiliada con una AFP que pertenece, al igual que **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, de lo cual se puede inferir que se encontraba a gusto de permanecer en el RAIS, y que dicha afiliación estaba precedida de conocimientos relativos al régimen en donde se estaba afiliando; y no, como



se afirma en la Demanda, a una decisión caprichosa de mi representada, sin que mediara la voluntad de la actora.

2. LOS LINEAMIENTOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN LO QUE SE REFIERE AL DEBER DE INFORMACIÓN EN CABEZA DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES, SE CONSTITUYE COMO UNA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA.

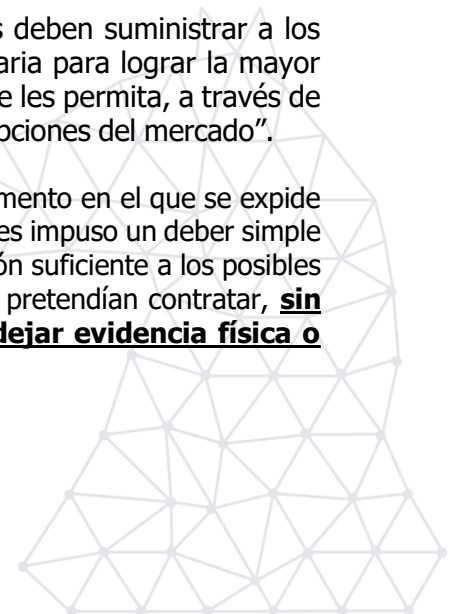
En aras de determinar si para el caso que nos ocupa la aplicación de la posición de la Corte Suprema de Justicia respecto del Deber de Información predicable de las Administradoras de Fondos de Pensiones se constituye como una violación del principio constitucional de confianza legítima, es necesario hacer un recuento histórico del desarrollo del mencionado deber. Para estos fines, se hará un breve resumen, el cual se segmentará de la siguiente manera: **i)** Fundación de las AFP y su Deber de Información (Decreto- Ley 663 de 1993); **ii)** El Deber de Asesoría y buen consejo (Ley 1328 de 2009 y Decreto 2241 de 2010); y **iii)** El Deber de Doble Asesoría (Ley 1748 de 2014, Decreto 2071 de 2015 y la Circular Básica Externa No. 016 de 2016 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia)

El ejercicio expuesto anteriormente tiene como única finalidad que el a quo descarte la utilización de la posición mantenida por la Corte Suprema de Justicia en relación con las Nulidades/Ineficacia de Traslado de Régimen Pensional, en tanto dicha jurisprudencia irrumpe con el principio de confianza legítima y buena fe consagrados en la Constitución Política de 1991 en su artículo 83 y, por tanto, dicha posición es contraria también a lo previsto en el artículo 4 de ese ordenamiento jurídico.

Expuesto lo que antecede, en **primer lugar**, se abordará el estudio del deber de información al momento del nacimiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el cual se encontraba regulado en el Decreto-Ley 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero). De este modo, el artículo 97 del mencionado Decreto- Ley 663 determinó que las Administradoras de Fondos de Pensiones debían suministrar información necesaria para que los futuros afiliados tomaran la decisión de afiliarse al respectivo fondo de manera libre y voluntaria. El artículo en comento, en su numeral primero preveía lo siguiente::

"1. Información a los usuarios. Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado".

Así las cosas, de la norma transcrita podemos concluir que para el momento en el que se expide la Ley 100 de 1993, a las Administradoras de Fondos de Pensiones se les impuso un deber simple de información, es decir, que sus promotores suministraran información suficiente a los posibles afiliados en todo lo relacionado con el producto o servicio que éstos pretendían contratar, **sin que se les impusiera la carga u obligación a los Fondos de dejar evidencia física o material de la información brindada.**





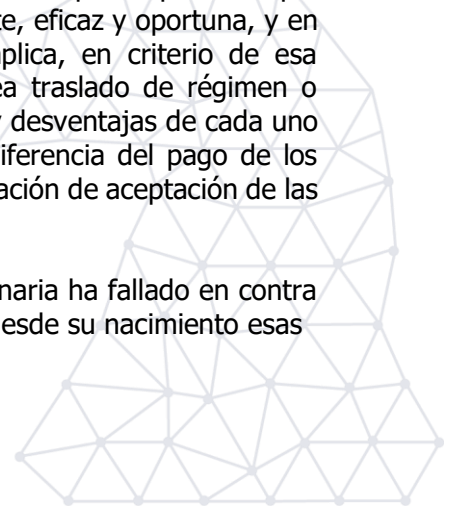
En segundo lugar, con la entrada en vigencia de la Ley 1328 de 2009 -reglamentada por el Decreto 2241 de 2010- le fue impuesto a las Administradoras de Fondos de Pensiones, además del deber de información simple consagrado en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero-, el Deber de Asesoría y Buen Consejo, el cual debía estar compuesto por un análisis previo de las condiciones económicas, laborales y personales del posible afiliado, además de complementarse con una explicación de los pormenores de los regímenes existentes (RAIS y RPMPD). **Debe aclararse una vez más que la norma no le impone la obligación o carga a las Administradoras de Fondos de Pensiones de conservar evidencia física o material de las asesorías brindadas a sus posibles afiliados.**

Por último, la **tercera etapa** del desarrollo normativo que ha sufrido el Deber de Información/Asesoría impuesto a las Administradoras de Fondos Privados, previo a la afiliación de cualquier ciudadano, se encuentra consagrada en la Ley 1748 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la Circular Externa No. 016 de 2016 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. En las normas referidas se le impone a las Administradoras de Fondos de Pensiones, además del análisis previo de las calidades y cualidades económicas, laborales y personales del posible afiliado y la ilustración de los pormenores de las características de uno u otro régimen; la obligación de generar una asesoría por parte de los representantes del Régimen de Prima Media como de los representantes del Régimen de Ahorro Individual con solidaridad.

En síntesis, en la tercera etapa del desarrollo del Deber de Información/Asesoría nos encontramos con que el Legislador, buscando crear seguridad jurídica para las personas respecto de su situación pensional (más aún cuando se trata del traslado de Régimen Pensional), le impuso a las administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES el deber de generar una asesoría en la que representantes de los dos (2) regímenes pensionales le muestren al afiliado de manera clara, suficiente y completa, las características, ventajas y desventajas de dichos regímenes, por supuesto atendiendo al perfil específico del interesado. Además de lo anterior, la Ley 1748 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la Circular Externa No. 016 de 2016 **impusieron -por primera vez- el deber que tienen las Administradoras de Fondos de Pensiones de conservar los documentos, audios o cualquier medio en el que conste la asesoría brindada a los afiliados.**

Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia, desde el año 2008 ha venido consolidando y aplicando indistintamente una línea jurisprudencial en la que se analiza lo relacionado con la nulidad de los traslados de régimen pensional, en la que ha señalado que las Administradoras de Fondos de Pensiones, por tener un deber especial de responsabilidad profesional por la posición que ostentan en el mercado, deben prestar sus servicios de forma eficiente, eficaz y oportuna, y en consecuencia cumplir con las obligaciones a su cargo; lo cual implica, en criterio de esa Corporación Judicial, que al momento de realizar una afiliación (sea traslado de régimen o traslado horizontal), la AFP debe informarle al afiliado los beneficios y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, el posible monto de la pensión, la diferencia del pago de los aportes, la conveniencia o no de la eventual determinación y la declaración de aceptación de las condiciones a las que se va a someter.

Es decir, vía jurisprudencia, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria ha fallado en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones, argumentando que desde su nacimiento esas





entidades han ostentado un Deber de Información/Asesoría de acuerdo con los criterios esgrimidos tanto en la Ley 1328 de 2009 como en la Ley 1748 de 2014; omitiendo por completo el estudio del caso concreto de conformidad con las normas que rodeaban la materia para el momento en el que se efectuó el traslado de régimen pensional correspondiente. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia descarta el análisis del desarrollo histórico de los deberes de información/asesoría que han tenido a su cargo las Administradoras de Fondos de Pensiones, asumiendo que éste se encontraba siempre vigente en los términos de la Ley 1748 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la Circular Externa No. 016 de 2016 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia; cuando lo cierto es que, para cada caso en específico, debe hacerse un análisis no sólo de la información aportada al potencial afiliado, sino de los deberes que le imponía la norma vigente a las AFP's para el momento en el que se generó el traslado de régimen pensional analizado.

Expuesto el desarrollo normativo y jurisprudencial que ha sufrido a lo largo del tiempo el Deber de Información/Asesoría en cabeza de las Administradoras de Fondos de Pensiones, se pasará a exponer porqué la aplicación de la posición adoptada por la Corte Suprema de Justicia mediante la línea jurisprudencial que se ha venido consolidando desde el año 2008, irrumpe con el principio constitucional de la confianza legítima y buena fe consagrado en el artículo 83 de la Carta Política.

Pues bien, el ordenamiento jurídico colombiano, en aras de crear seguridad jurídica para sus administrados, consagró la garantía de confianza legítima como medio para limitar la modificación brusca e inesperada de las reglas de juego que regulan cualquier situación jurídica. Frente al principio de confianza legítima, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-131 de 2004 señaló:

"El principio de la confianza legítima es un corolario de aquel de la buena fe y consiste en que el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas de juego que regulaban sus relaciones con los particulares, sin que se les otorgue a estos últimos un período de transición para que ajusten su comportamiento a una nueva situación jurídica. No se trata, por tanto, de lesionar o vulnerar derechos adquiridos, sino tan sólo de amparar unas expectativas válidas que los particulares se habían hecho con base en acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, bien que se trate de comportamientos activos o pasivos de la administración pública, regulaciones legales o interpretaciones de las normas jurídicas. De igual manera, como cualquier otro principio, la confianza legítima debe ser ponderada, en el caso concreto, con los otros, en especial, con la salvaguarda del interés general y el principio democrático". (He subrayado y resaltado).

La Corte Constitucional en la misma sentencia, sostuvo:

"En esencia, la confianza legítima consiste en que el ciudadano debe poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible, en el cual pueda confiar. Para Müller, este vocablo significa, en términos muy generales, que ciertas expectativas, que son suscitadas por un sujeto de derecho en razón de un determinado comportamiento en relación con otro, o ante la comunidad jurídica en su conjunto, y que producen determinados efectos jurídicos; y si se trata de autoridades públicas,



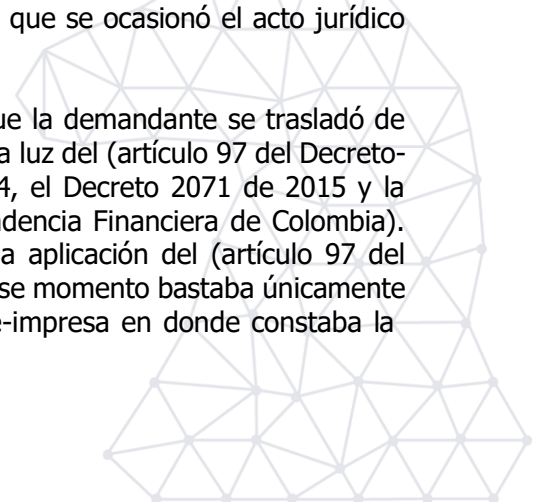
consiste en que la obligación para las mismas de preservar un comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los particulares, surgido en un acto o acciones anteriores, incluso ilegales, salvo interés público imperioso contrario. Se trata, por tanto, que **el particular debe ser protegido frente a cambios bruscos e inesperados efectuados por las autoridades públicas. En tal sentido, no se trata de amparar situaciones en las cuales el administrado sea titular de un derecho adquirido, ya que su posición jurídica es susceptible de ser modificada por la Administración, es decir, se trata de una mera expectativa en que una determinada situación de hecho o regulación jurídica no serán modificadas intempestivamente.** De allí que el Estado se encuentre, en estos casos, ante la obligación de proporcionarle al afectado un plazo razonable, así como los medios, para adaptarse a la nueva situación". (He resaltado y subrayado).

De este modo, el principio de confianza legítima se aplica cuando cualquiera de los órganos del poder público genera una modificación o alteración intempestiva, abrupta e inesperada de las condiciones en las que se venía desarrollando cualquier acto jurídico. Aplicando lo anterior a la situación que nos ocupa, podemos afirmar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en lo que tiene que ver con la Nulidad de Traslados de Regímenes Pensionales, ha incurrido en una violación indiscutible al principio constitucional de la confianza legítima, sobre todo en relación con el Deber de Información/Asesoría impuesto a las Administradoras de Fondos de Pensiones; pues en vez de verificar para cada caso en específico el momento en el que se generó el traslado de régimen pensional, se atiene únicamente a verificar si la información brindada al posible afiliado cumplió con los requisitos establecidos en normas cuya expedición es muy posterior a la consumación del acto de traslado de régimen. Frente a esto, la Corte Constitucional en la sentencia citada, concluyó:

"La Corte al estimar que la interpretación judicial debe estar acompañada de una necesaria certidumbre y que el fallador debe abstenerse de operar cambios intempestivos en la interpretación que de las normas jurídicas venía realizando, y por ende, el ciudadano puede invocar a su favor, en estos casos, el respeto por el principio de la confianza legítima". (He resaltado y subrayado).

Conforme lo anterior, además de la violación del principio constitucional de la Confianza Legítima, es claro que la aplicación del precedente judicial de la Corte Suprema de Justicia de manera indiscriminada se constituye como una violación del derecho fundamental al Debido Proceso (Art. 29 del Estatuto Superior); pues se están aplicando a determinadas relaciones jurídicas normas que no estaban vigentes para la época en la que se ocasionó el acto jurídico que pretende hacerse ver como ineficaz.

Aterrizando lo expuesto al caso concreto, podemos afirmar que la demandante se trasladó de régimen pensional, esta situación particular debe analizarse a la luz del (artículo 97 del Decreto-Ley 663 de 1993/ la Ley 1328 de 2009/ la Ley 1748 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la Circular Externa No. 016 de 2016 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia). Entonces, al haberse realizado el traslado de régimen bajo la aplicación del (artículo 97 del Decreto-Ley 663 de 1993), debe tenerse en cuenta que para ese momento bastaba únicamente con diligenciar un formulario que contuviera una leyenda pre-impresa en donde constaba la



manifestación de voluntad del afiliado y no era necesario guardar constancia alguna de la información aportada.

Lo anterior para concluir que el traslado efectuado por la demandante se dio atendiendo a los criterios normativos impuestos a las Administradoras de Fondos de Pensiones para la fecha del traslado y, por tanto, goza de plena validez jurídica. Tanto es así, que, si bien el Deber de Información/Asesoría ha cambiado a lo largo de los años, no puede endilgarse engaño por parte de esas entidades, cuando lo cierto es que, al momento de la afiliación, éstas actuaron conforme a la ley prevalente para el momento y la aplicaron en su totalidad. Además, aunado a lo expuesto en el acápite que antecede, la afiliación de la demandante al RAIS se dio acorde con su manifestación de voluntad, ante la cual no podía mediar interferencia alguna ni de los Fondos Privados, como tampoco de su empleador.

3. LAS ALEGACIONES DE LA DEMANDANTE RESPECTO DE LA FALTA DE INFORMACIÓN NO ES POR SÍ SOLO SUFICIENTE PARA LA INEFICACIA DEL ACTO DE TRASLADO DEL RÉGIMEN PENSIONAL.

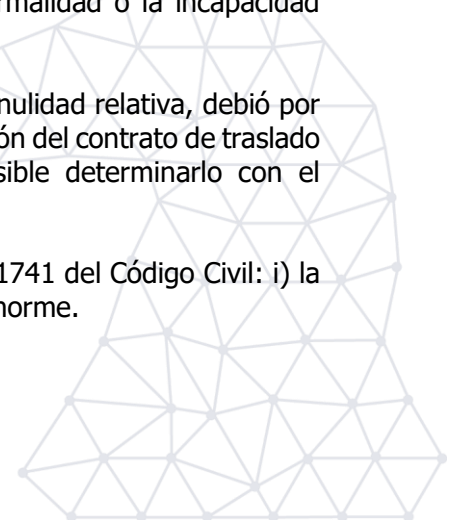
La demandante alega una falencia en la información entregada por el fondo de pensiones al cual se vinculó inicialmente y sobre el particular deberá tenerse en cuenta que, la estructura y condiciones del RPM y del RAIS se encuentran cabalmente estipulados en la Ley 100 de 1993 y las demás normas complementarias, por lo que no resulta plausible que la demandante alegue que no fue asesorada de manera completa, veraz, oportuna, adecuada, suficiente y clara sobre las diferencias de los regímenes, los beneficios y desventajas al momento de suscribir el formulario de afiliación a Skandia. Lo anterior, en la medida en la que aceptar las alegaciones presentadas por la demandante, sería equivalente a aceptar que el desconocimiento de la ley tiene capacidad suficiente para generar un vicio en el consentimiento. Así mismo, lo anterior, iría en contravía de lo estipulado en el artículo 9 del Código Civil, el cual señala que: “El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento”

4. EL DESCONOCIMIENTO DE LA LEY NO GENERA UN VICIO EN EL CONSENTIMIENTO.

Se debe señalar que, aunque se pretende que se declare la ineficacia sobre su afiliación al trasladarse de régimen pensional, las consecuencias de la ineficacia pretendida son las mismas de la nulidad y en ese orden de ideas, lo que podría existir en este caso es una nulidad relativa, pues no se cumplen los supuestos de hecho necesarios para argüir una nulidad absoluta, como lo sería el objeto o causa ilícita, la omisión de algún requisito o formalidad o la incapacidad absoluta.

Así las cosas, si lo que pretende la demandante es que se declare la nulidad relativa, debió por lo menos señalar cuáles de las causales se configuraron en la celebración del contrato de traslado de régimen pensional. Sin embargo, ello no ocurrió y no es posible determinarlo con el expediente.

Las causales de nulidad relativa lo serían, de acuerdo con el artículo 1741 del Código Civil: i) la incapacidad relativa; ii) los vicios del consentimiento y; iii) la lesión enorme.





En atención a lo anterior, se debe precisar que en el caso que se analiza ni la incapacidad relativa ni la lesión enorme son las causales de nulidad que se podrían llegar a presentar en el caso, pues la demandante no allega prueba alguna que respalde una supuesta incapacidad relativa en su cabeza. En relación con la lesión enorme, se debe precisar que la misma es una figura que sólo es aplicable para aquellos casos en los que en atención a un negocio jurídico comprador o vendedor pueden solicitar que se rescinda un contrato de compraventa, lo cual, de manera evidente no es el supuesto que se analiza en este caso.

De esta manera, la única posible causal de nulidad que resultaría alegable por parte de la demandante sería la existencia de un vicio del consentimiento. Véase que a voces del artículo 1508 del Código Civil el vicio del consentimiento sólo puede ser causado error fuerza y dolo.

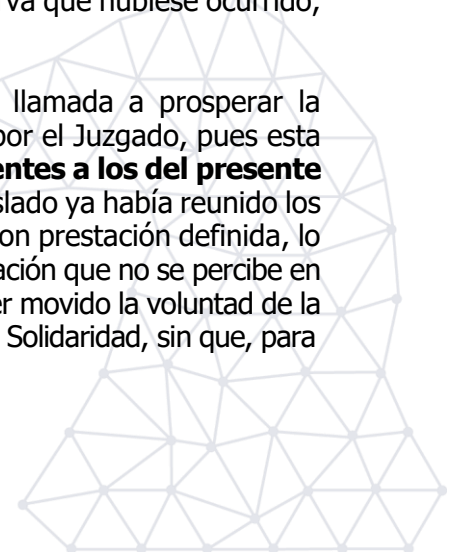
En relación con el dolo se debe precisar que el caso objeto del presente análisis no se configura, toda vez que en atención a lo señalado en artículo 1515 y 1516 ibídem el dolo no se presume, salvo en aquellos casos en los que la ley así lo establece, siendo obligación de quien lo alegue probarlo de manera suficiente. Sumado a lo anterior, no se puede perder de vista que el dolo que genera la nulidad relativa debe ser de tal suficiencia que sin él la demandante no hubiese contratado.

Así pues, se tiene que en este caso en particular el dolo no se configura, no sólo porque la demandante no lo prueba siquiera de manera sumaria, sino que, teniendo en cuenta las condiciones personales de la demandante, se tiene que si ella hubiese sido una persona diligente podría haber verificado las condiciones, características, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, de manera que aun cuando existiese el dolo, cosa que no se prueba, no sería de tal magnitud que la demandante, actuando como un buen padre de familia, se hubiese abstenido de realizar el traslado al régimen pensional si considerara que las condiciones y características del RAIS fuesen contra sus intereses.

La anterior postura se encuentra válidamente respaldada por jurisprudencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en sentencia del 10 de septiembre de 2012, en la que se señaló:

“Pero, como si lo anterior fuera poco, ante la clara sindicación de la demandante de haber sufrido engaño por parte de la AFP PORVENIR, esto es endilgarle dolo en su actuar, frente al expreso mandato legal contenido en el artículo 1516 del Código Civil, no cabe duda que **debió probar su afirmación**, lo que no se observa que hubiese ocurrido, pues en el expediente o hay prueba en tal sentido.

Finalmente, resulta del caso notar que, tampoco estaba llamada a prosperar la pretensión con base en la jurisprudencia traída a colación por el Juzgado, pues esta **contempla unos supuestos de hecho totalmente diferentes a los del presente caso** en cuanto el allí demandante para el momento del traslado ya había reunido los requisitos para pensionarse en el régimen de prima media con prestación definida, lo que de suyo le representaba un perjuicio actual evidente, situación que no se percibe en el presente asunto, en el que múltiples motivos pudieron haber movido la voluntad de la demandante para preferir el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, sin que, para





el momento en que lo hizo se perciba de manera manifiesta el acaecimiento de un perjuicio evidente (...)"(Subrayas y negrilla fuera del texto original).

Ahora bien, en cuanto al posible vicio del consentimiento a razón del error, será necesario señalar que existen errores de hecho y de derecho. En relación con el primero, se tiene que será un error de hecho en aquellos casos en los que se yerra en cuanto a la especie del acto o contrato, así como a la identidad de la cosa específica. Así las cosas, en el caso objeto de análisis el error de hecho no se configura, en la medida en la que la demandante con posterioridad al traslado al RAIS continuó realizando aportes a seguridad social en pensiones en dicho régimen.

En cuanto al error de derecho, se debe indicar que, aun cuando sería la figura que mejor aplicaría al caso en concreto, pues según las alegaciones de la demandante, si bien era consciente que lo que estaba llevando a cabo era el traslado de régimen, desconocía las condiciones del RAIS y sus consecuencias, de manera que, en últimas, ello no implicaría otra cosa más que desconocimiento de una figura legal. Es más, aceptar la existencia de un error de derecho en los términos señalados por la parte demandante implicaría reconocer que el ordenamiento jurídico, en contravía de lo establecido en el artículo 9 del Código Civil, tiene como excusa el desconocimiento del derecho, lo cual no es viable más aun cuando el artículo 1509 del Código Civil indica que el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento, pues precisamente equivaldría a que el traslado de la demandante al RAIS se generó como consecuencia del desconocimiento de la ley por parte de la demandante.

Así las cosas, señala el artículo 9 del Código Civil:

"La ignorancia de las leyes no sirve de excusa".

De igual mente, prescribe el artículo 1509 del Código Civil.

"El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento"

En este punto resulta indispensable señalar que salvo el error de derecho que se analizó en precedencia, la única causal adicional que podría esgrimir la demandante sería el de dolo por parte de la AFP que realizó el traslado de régimen pensional, sin embargo, no puede pasarse por alto que la demandante en el escrito de la demanda no allega prueba siquiera sumaria dirigida a acreditar que la AFP que llevó a cabo el traslado hubiese actuado de manera dolosa.

Sobre el particular, se debe indicar que los artículos 1515 y 1516 del Código Civil son enfáticos en señalar que el dolo no vicia el consentimiento, salvo que sea obra de una de las partes y tuviese una incidencia tal que, de no haber existido el dolo, la demandante no habría suscrito el contrato. Asimismo, se indica que el dolo no se presume, salvo para los casos en los que la Ley así lo señale, en todos los demás casos el dolo deberá probarse.

Así las cosas, si lo que la demandante pretende alegar es que la administradora inicial del RAIS, a la cual estuvo vinculada, la indujo a error, ello no implica otra cosa más que la administradora habría actuado de manera dolosa y, en consecuencia, de ello habría un vicio en el consentimiento. Sin embargo, dicha alegación está llamada al fracaso, toda vez que:



- i) Las características, condiciones, ventajas y desventajas con las que cuenta cada uno de los regímenes, se encuentran establecidas en la Ley 100 de 1993 y las demás disposiciones complementarias, de manera que el dolo, en caso de existir, no es de naturaleza tal que, de haberse presentado, la demandante no hubiese suscrito el contrato, pues la parte actora contaba con las herramientas suficientes y necesarias para poder verificar si la información dada por parte de la AFP era suficiente o no;
- ii) La demandante no prueba de manera siquiera sumaria la existencia del dolo, de manera que el mismo no podrá ser declarada si la demandante no cumple con la carga de la prueba que la ley le impone en su cabeza. Finalmente, la fuerza como una de las causales de vicio del consentimiento, es una figura que no se aplica al caso que se analiza, en cuanto que la fuerza supone que se genere un temor en la persona o una impresión fuerte, lo cual la demandante en este caso no alega.

5. LA DEMANDANTE CONTÓ CON VARIAS OPORTUNIDADES PARA TRASLADARSE NUEVAMENTE DE RÉGIMEN Y NO LO HIZO.

Debe tenerse en cuenta que, la demandante durante todos estos años de afiliación al RAIS contó con varias oportunidades para revertir su decisión de cambiar de régimen pensional e incluso lo hizo, decidiendo y libre y voluntariamente retornar al RAIS, de lo cual solamente es posible concluir que siempre mantuvo un interés en mantenerse vinculado a este régimen pensional, pues de lo contrario, hubiese optado por trasladarse al RPM.

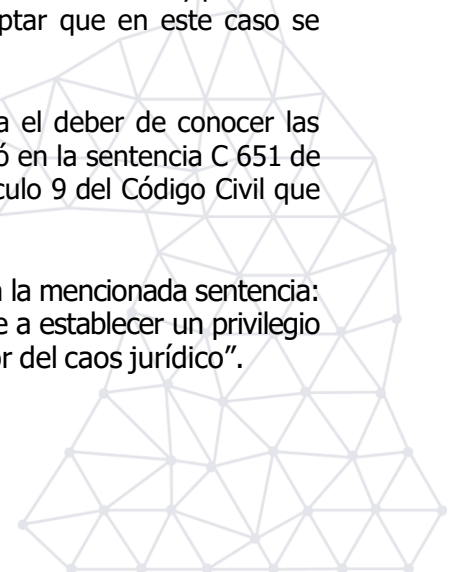
Importa anotar que de esta posibilidad de traslado se dio conocimiento a la opinión pública por parte de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) a través de la Circular Externa No 001 de 2004. Igualmente, Asofondos, entidad gremial que agrupa a las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, hizo pública esa posibilidad en un comunicado que fue publicado en un diario de amplia circulación nacional.

Aparte de ello, el artículo 3 del Decreto 1161 de 1994 estableció un derecho de retracto para el traslado de régimen pensional.

Como se observa, la demandante contó con varias posibilidades legales para regresar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, de las cuales es forzoso entender que tenía conocimiento por estar establecidas en disposiciones legales de público conocimiento y por haber sido ejercidas por ella misma. Alegar lo contrario equivaldría a aceptar que en este caso se justifica y excusa la ignorancia de la ley.

Es bien sabido que en cabeza de todos los ciudadanos se encuentra el deber de conocer las leyes, pues no es excusa su desconocimiento, tal y como se estableció en la sentencia C 651 de 1997, cuando la Corte Constitucional estudió la exequibilidad del artículo 9 del Código Civil que dispone:

“Art.9: La ignorancia de la ley no sirve de excusa”. Se indicó en la mencionada sentencia: (...) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico”.





En ese sentido, debe apreciarse por parte del Despacho que la demandante, quien es la mayor interesada en su situación pensional, actuó de forma poco diligente frente a los traslados realizados y solamente después de muchos años mostró un inusitado interés por su situación pensional.

Ahora bien, se llama la atención del despacho ya que, atendiendo a las calidades profesionales y laborales de la aquí demandante, teniendo en cuenta que esta hace parte de la UTL del Senador José David Name Cardozo; **a la demandante le era absolutamente exigible un deber de diligencia que permitiera, al inicio o a lo largo de su permanencia en el RAIS, indagar y/o cuestionar los conceptos y eventos propios del régimen elegido.** Esto con el fin de objetar la gestión de los fondos y reconsiderar su decisión dentro de la oportunidad legal. Es inexcusable que la demandante pretenda justificar su falta al deber de diligencia que le asistía para averiguar y/o indagar en oportunidad sobre su status pensional.

6. EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES HACE VÁLIDO EL ACTO DE AFILIACIÓN DE LA DEMANDANTE AL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD.

Continuando con los motivos que fundamentan la imposibilidad de acceder a las pretensiones de la Demanda formulada por la actora, es necesario analizar si el acto jurídico por medio del cual se configuró el traslado de régimen acredita los requisitos que la ley impone o si, por el contrario, es dable declarar su nulidad por haberse omitido uno de ellos. En este sentido, para efectos de lo descrito es necesario determinar si la Demandante cumplía con las calidades necesarias para obligarse.

Así las cosas, debe ponerse de presente que los requisitos que un sujeto de derechos debe acreditar para ser capaz de obligarse y, por tanto, para ejecutar válidamente un acto o relación jurídica, se encuentran contenidos en el artículo 1502 del Código Civil colombiano, el cual preceptúa en su tenor literal lo siguiente:

"ARTICULO 1502. <REQUISITOS PARA OBLIGARSE>. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario:

1o.) que sea legalmente capaz.

2o.) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.

3o.) que recaiga sobre un objeto lícito.

4o.) que tenga una causa lícita.

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra". (He resaltado y subrayado).

Además de lo expuesto, conforme se explicó en el acápite que antecede, en el campo de la Seguridad Social se ha implementado para el caso de los traslados de régimen pensional, una condición especial previa a su materialización, según la cual las Administradoras de Fondos de Pensiones tienen que ilustrar de manera suficiente y clara al posible afiliado las condiciones en las que se desenvolverá su situación pensional, es decir, que el consentimiento del afiliado se encuentre debidamente permeado por dicha información.



Ahora bien, en el escrito de la Demanda formulada por la actora se solicita al Juez que se declare la ineficacia del traslado de régimen. sin dejar claro si la ineficacia se genera por la inexistencia del acto, la nulidad absoluta, la nulidad relativa o la inoponibilidad del mismo. Imprecisión que no es irrelevante, pues los efectos jurídicos que consagra la norma para cada una de estas figuras son distintos.

En efecto, debe tenerse claro que la **inexistencia** impide que el acto afectado produzca efectos jurídicos; por su parte, el efecto de la **nulidad absoluta consiste en** retrotraer las cosas al estado en el que se encontraban antes de la celebración del acto jurídico correspondiente; la **nulidad relativa**, retrotrae los efectos a su estado inicial, sin embargo, se caracteriza por ser saneable, ya sea por el paso del tiempo o por la ratificación del afiliado_y, por último, **la inoponibilidad** deja sin acción alguna a los interesados respecto del negocio o acto jurídico celebrado.

Verificado el escrito de la Demanda formulada por la actora, y haciendo un esfuerzo interpretativo sobre el mismo, dada la imprecisión de que adolece, es posible colegir que lo pretendido por la actora es la nulidad relativa del traslado, pues no se acreditan, ni siquiera teóricamente, los presupuestos para argüir una sanción de invalidez diferente., a la luz de lo contemplado por los artículos 1502 y 1741 del Código Civil. Así las cosas, si lo que pretende la Demandante es que se declare la nulidad relativa, éste debió señalar cuál de las causales que dan lugar a esa sanción se configuró en la celebración del acto con el que se consumó el traslado de régimen pensional, las cuales pueden ser: **i) Incapacidad Relativa; ii) Los vicios del consentimiento; y iii) lesión enorme.**

En lo que guarda relación con la nulidad relativa, para el caso que nos ocupa, es procedente establecer que ella no podría ser aquí argüida con base en la incapacidad relativa, o en la lesión enorme, pues para que se declare la primera no se aporta prueba alguna que acredite a la Demandante como incapaz relativo; y en lo que respecta a la lesión enorme, tampoco se reúnen los requerimientos que esa figura precisa, consistentes en la presencia de un contrato en el que se ven afectados los intereses de alguna de las partes, cuando el valor del objeto que subyace al acuerdo de voluntades difiere desproporcionadamente de su valor real.

En consecuencia, dentro del ejercicio interpretativo al que obliga el Escrito de Demanda, dada su imprecisión y falta de claridad, hay que colegir que la única casual que podría alegar la Demandante es la configuración de vicios del consentimiento, la cual –como se explicará– tampoco tiene cabida en el proceso que hoy nos convoca. De esta manera, respecto de los vicios del consentimiento el artículo 1508 del Código Civil determina:

“ARTICULO 1508. VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. Los vicios de que puede adolecer el consentimiento, son error, fuerza y dolo”.

En cuanto al error y siguiendo lo preceptuado en el artículo 1509 de ese mismo cuerpo normativo, es pertinente establecer que el yerro de derecho no produce vicios del consentimiento, por lo cual es irrelevante de cara al proceso sub-examine.

Frente al error de hecho, según los dispuesto en el artículo 1510 del Código Civil, éste sólo vicia el consentimiento cuando se presenta en relación con la especie del acto o contrato celebrado.



o sobre la identidad de la cosa en específico; errores que no se verifican en el contrato celebrado por la actora y SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. , ya que la demandante SÍ pretendió afiliarse al RAIS y seguir afiliado al mismo, toda vez que se trasladó entre administradoras de ese régimen, con lo cual convalidó su decisión de seguir perteneciendo al mismo.

Por otro lado, en cuanto al dolo, el artículo 1516 del Código Civil señala que debe ser probado por quien lo alega, y dentro de la demanda tan sólo se realizan una serie de afirmaciones vagas que no encuentran respaldo probatorio, como no podría ser diferente porque éste no tuvo lugar en el caso que nos ocupa. Finalmente, la fuerza como una de las causales de vicio del consentimiento, es una figura que no se aplica al caso en concreto, en cuanto que ella lleva consigo que se genere un temor o impresión fuerte en la persona, la cual la Demandante no alega en el presente caso y tampoco se presentó.

En síntesis, si bien es cierto existe un Deber de Información/Asesoría por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones, éste debe analizarse de acuerdo con:

- a. El momento histórico en el que se dio el acto que configuró el traslado de régimen pensional, atendiendo a que éste ha evolucionado a través de los años, y los deberes que tenían las AFP's **para el año 2005, fecha de su traslado de régimen pensional a Porvenir**, son distintos a los que actualmente ostentan;
- b. Que por más que exista el mencionado deber, ello per se no exonera al potencial afiliado de concurrir lo suficientemente ilustrado a la escogencia de su régimen pensional, del cual dependerán sus expectativas económicas y de plazo para acceder a la pensión de vejez;
- c. Que si bien la norma impone ciertos deberes a las Administradoras, el hecho de no ser un profesional en la materia no sustrae al potencial afiliado de la aplicación de las prohibiciones consagradas en la ley, como tampoco anula su capacidad para celebrar actos y contratos de una importancia tan amplia como esta.

Lo anterior se encuentra respaldado por el salvamento de voto a la sentencia SL-1452-2019, cuya Magistrada Ponente es la Doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, acto procesal que establece lo siguiente:

"(...) el acto de traslado si bien impone un deber de información suficiente por parte de las administradoras, ello per se, no exonera al afiliado del deber de concurrir suficientemente informado a la escogencia de su régimen pensional, de la cual dependerán sus expectativas económicas y de plazo para acceder a las prestaciones por vejez; como tampoco lo sustraen de la aplicación de la ley, para darle un tratamiento desigual, como si su capacidad para celebrar actos y contratos estuviera menguada frente a la definición de un acto de mayor importancia, en la medida en que de su elección dependerán las condiciones de cubrimiento de las contingencias, amparadas por el sistema de seguridad social y en particular la de vejez". (He resaltado y subrayado).



En conclusión, que, a la fecha de presentación de la demanda, la parte actora considere que en su momento se le debió indicar otra información adicional a la que mandaba la ley, no es razón suficiente o argumento para alegar un error de forma o una mala asesoría, y tampoco se aviene con el ordenamiento jurídico aplicable a la materia, razón por la cual el traslado examinado no adolece de ninguna invalidez y así debe ser reconocido.

7. EL TRASLADO EFECTUADO POR LA DEMANDANTE A SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES NO LE OCASIONÓ PERJUICIO ALGUNO, PUES ÉSTA VENÍA DE ESTAR AFILIADA AL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD CON UNA AFP DISTINTA A MI REPRESENTADA.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la afiliación de la actora al fondo de pensiones administrado por **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.** se efectuó como traslado horizontal entre administradoras del mismo régimen. Lo anterior, en virtud del artículo 107 de la Ley 100 de 1993, el cual expone:

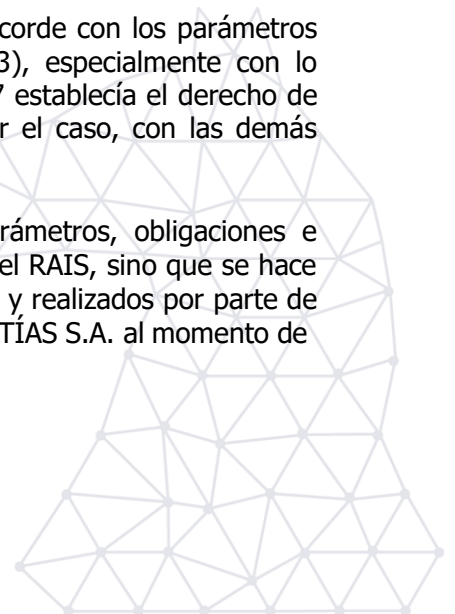
“ARTICULO. 107.-Cambio de plan de capitalización o de pensiones y de entidades administradoras. Todo afiliado al régimen y que no haya adquirido la calidad de pensionado, podrá transferir voluntariamente el valor de su cuenta individual de ahorro pensionado a otro plan de capitalización o de pensiones autorizado, o trasladarse a otra entidad administradora”.

En conclusión, el hecho que la Demandante mantenga vigente su afiliación al RAIS, a través de las vinculaciones realizadas, que insisto se presentó como traslado entre AFP, no obedece a una conducta arbitraria o caprichosa del fondo de pensiones y menos aún de la sociedad **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**, sino a la falta de manifestación de voluntad de la misma Demandante de regresar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, al no haber solicitado el traslado de régimen pensional en los términos que la norma establece.

8. LA AFILIACIÓN DE LA DEMANDANTE CON MI REPRESENTADA SE REALIZÓ ACORDE CON LOS PARÁMETROS EXIGIDOS Y CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVIDAD LABORAL VIGENTE.

La afiliación de la Demandante con mi representada se realizó acorde con los parámetros exigidos y contemplados en la normatividad (Ley 100 de 1993), especialmente con lo previsto en el Decreto-Ley 663 de 1993, el cual en su artículo 97 establecía el derecho de información por parte de los consumidores financieros y, de ser el caso, con las demás disposiciones que a posteriori modificaron ese deber.

En las normas traídas a colación, no sólo se explican los parámetros, obligaciones e información que se deben seguir y practicar para todas las AFP del RAIS, sino que se hace referencia a tres (3) aspectos que fueron totalmente desplegados y realizados por parte de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.** al momento de informar/ asesorar a la demandante, como es que:





- ✓ **Fue información cierta:** toda vez que la demandante, cuando se afilió a SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., tuvo pleno conocimiento de las condiciones con las cuales pertenecía a este régimen, y la información/asesoría de SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. le permitió ser consciente de las circunstancias del RAIS, lo que deja en evidencia, que SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. en este caso no se reservó o guardó para sí ningún dato relevante para la vinculación jurídica de la Demandante.
- ✓ **En cuanto a la información suficiente,** se toma como la información que logre que la afiliada tenga un conocimiento más amplio sobre las características del sistema, los productos y las condiciones para acceder a uno u otro régimen pensional. Aspecto que se hizo por parte de SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., y que permitió que la Demandante quedara satisfecha con dicha información/asesoría y acompañamiento a lo largo de su afiliación, pues a la fecha de contestación de la presente Demanda continua en este régimen.
- ✓ **La información sea oportuna,** lo que implica que la información deberá ser transmitida en los momentos previstos para ello. Aspecto que también se cumplió por parte de SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., ya que durante el tiempo en que ha estado afiliada con mi representada, a la Demandante se le ha brindado la información que necesita saber sobre el RAIS, y sobre su situación pensional acorde al caso.

9. LA SOLICITUD DE INEFICACIA DE LA DEMANDANTE CONTRARÍA EL PRINCIPIO DE LOS ACTOS PROPIOS.

Se debe tener en cuenta que, si bien es cierto que el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 modificó el literal e del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, señaló que el plazo a partir del cual el afiliado podrá trasladarse de régimen corresponde a 5 años posteriores al traslado, no implica ello que el afiliado no hubiese contado con la posibilidad de trasladarse en vigencia de esta disposición, pues desde la entrada en vigencia de esta norma hasta la presentación de la demanda, han transcurrido más de 20 años.

Lo anterior implica, que la parte demandante no puede pretender vía proceso ordinario la declaración de la ineficacia de la afiliación, cuando en sí misma contraría sus actuaciones y decisiones en materia pensional, **como quiera que pese a tener el tiempo suficiente para trasladarse al RPM e incluso haberlo hecho tras su traslado original, adoptó la decisión de permanecer en el rais y de hacer varios traslados horizontales dentro de este.**

En este punto se debe traer en cuenta la doctrina de los actos propios desarrollada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que en sentencia SC10895 de 2015, haciendo alusión a sentencia 2006-00041-01 de 2013, señaló:

“Inocultable es, por lo tanto, la importancia de actuar con sujeción a los postulados que se derivan del principio general de la buena fe, pues sólo así

es posible 'la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo', que a veces del artículo 2º de la Constitución Política son, entre otros más, fines del Estado Social del Derecho.

(...) Con fundamento en el comentado principio, se ha estructurado la 'doctrina de los actos propios' -venire contra factum proprium non valet-, conforme a la cual, en líneas generales, con fundamento en la buena fe objetiva existe para las personas el deber de actuar de manera coherente, razón por la cual ellas no pueden contradecir sin justificación sus conductas anteriores relevantes y eficaces, específicamente si con tales comportamientos se generó una expectativa legítima en los otros sobre el mantenimiento o la continuidad de la situación inicial". (Subrayas y negrilla fuera del texto original).

10. ACTUALMENTE LA SOLICITUD DE INEFICACIA DE LA VINCULACIÓN SE ENCUENTRA PRESCRITA.

Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara que al momento del traslado la parte demandante fuese objeto de algún tipo de vicio de consentimiento, no se puede pasar por alto que la pretensión de nulidad se encontraría actualmente prescrita, por los argumentos que se proceden a exponer.

En primer lugar, el artículo 1750 del Código Civil predica:

"El plazo para pedir la rescisión durara cuatro años.

Este cuatrienio se contará, en el caso de violencia, desde el día en que ésta hubiere cesado; en el caso de error o de dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato.

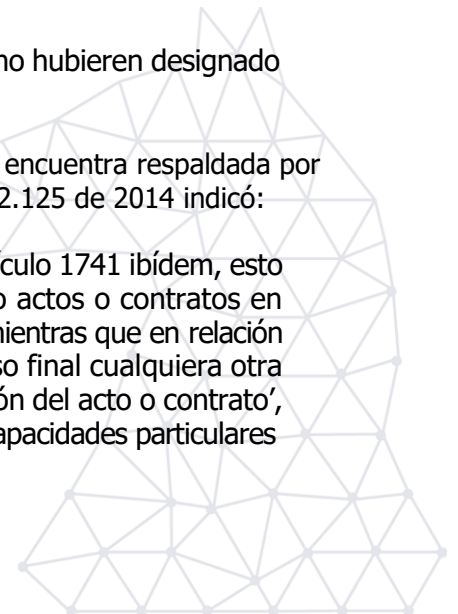
Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se contará el cuatrienio desde el día en que haya cesado esta incapacidad.

A las personas jurídicas que por asimilación a los menores tengan derecho para pedir la declaración de nulidad, se les duplicará el cuatrienio y se contará desde la fecha del contrato.

Todo lo cual se entiende en los casos en que las leyes especiales no hubieren designado otro plazo".

La aplicación de esta disposición a casos como el que nos convoca se encuentra respaldada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que en sentencia 22.125 de 2014 indicó:

"La nulidad absoluta se reduce a las causales contenidas en el artículo 1741 ibídem, esto es, el objeto ilícito, la causa ilícita, la omisión de ciertos actos o actos o contratos en consideración de la naturaleza de ellos y la incapacidad absoluta, mientras que en relación con la nulidad relativa esa misma disposición dispuso en su inciso final cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato', lo que se predica como derivados de una incapacidad relativa o incapacidades particulares





como por ejemplo, las que impone la ley a ciertas personas para ejecutar algunos actos, los emanados del consentimiento, valga decir, el error, el dolo y la fuerza, la lesión enorme en ciertos casos, etc.

Es del caso agregar, que de haber existido un vicio que diera lugar a la única nulidad posible para el caso particular, esto es, la relativa, estaría vencido el plazo de cuatro años para pedir la rescisión o nulidad de contrato previsto en el artículo 1750 ibídem”

Ahora bien, si el Despacho considera que dada la naturaleza de seguridad social que tiene la acción de nulidad interpuesta por la demandante, las normas que regularían la prescripción en el caso en concreto serían las contenidas en los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y 488 del Código Sustantivo del Trabajo, que establecen un término de tres años para que opere la prescripción, la acción igual se encontraría prescrita.

Aunado a lo anterior se tiene que, no puede otorgársele a la acción de nulidad los mismos efectos que se le otorgan al derecho pensional, pues la naturaleza del primero es la de un contrato civil, aun cuando tenga incidencia indirecta en el derecho pensional de cada uno de los afiliados. Asimismo, se deberá tener en cuenta que el derecho pensional, así como los aportes a seguridad social en pensiones se tornan imprescriptibles a razón de la naturaleza de la prestación, que no es otra que la de ser una obligación de tracto sucesivo. Sin embargo, no sucede lo mismo con el traslado de la demandante a uno u otro régimen, toda vez que ello no afecta el reconocimiento mismo al derecho pensional.

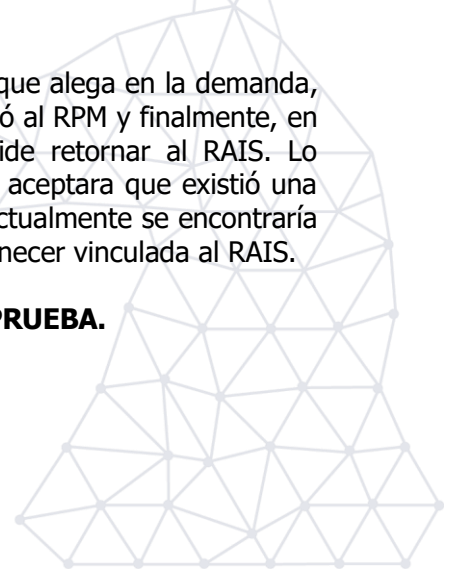
11. EN CASO DE EXISTIR NULIDAD ALGUNA, LA MISMA YA SE ENCONTRARÍA SANEADA.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que, aun cuando se aceptará que existió un vicio en el consentimiento, lo cierto es que este tipo de vicio sólo tiene la facultad de generar una nulidad relativa más no absoluta, de manera que la misma, en atención a lo señalado en el artículo 1743 del Código Civil, que indica:

“La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez o prefecto sino a pedimento de parte; ni puede pedirse su declaración por el Ministerio Público en el solo interés de la ley; ni puede alegarse sino por aquéllos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o por sus herederos o cesionarios; y puede sanearse por el lapso de tiempo o por ratificación de las partes”.

De hecho, véase que la demandante actuó de manera contraria a lo que alega en la demanda, pues realizó el traslado inicial del RPM al RAIS, posteriormente retornó al RPM y finalmente, en conocimiento tácito de los pormenores de ambos regímenes, decide retornar al RAIS. Lo anterior, no implica cosa distinta a que, si en gracia de discusión se aceptara que existió una nulidad relativa por un presunto vicio del consentimiento, la misma actualmente se encontraría saneada, por la ratificación de la demandante en su interés de permanecer vinculada al RAIS.

12. IMPROCEDENCIA DE LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA.





En primer término, se debe advertir que, respecto a la aplicación de la jurisprudencia como fuente auxiliar de derecho, el artículo 230 de la Constitución Política de Colombia prescribe:

“La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.”

Por su parte, en materia legal, la Ley 153 de 1887, en su artículo 4, determina que la jurisprudencia servirá para ilustrar la Constitución en casos dudosos. Mientras que, el artículo 4 de la Ley 169 de 1896, determina que:

“Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los Jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores.” (Subrayas y negrilla fuera del texto original).

En consecuencia, tenemos que la jurisprudencia podrá ser aplicada por los jueces como criterio auxiliar de derecho, para destrabar la Litis **en casos análogos.**

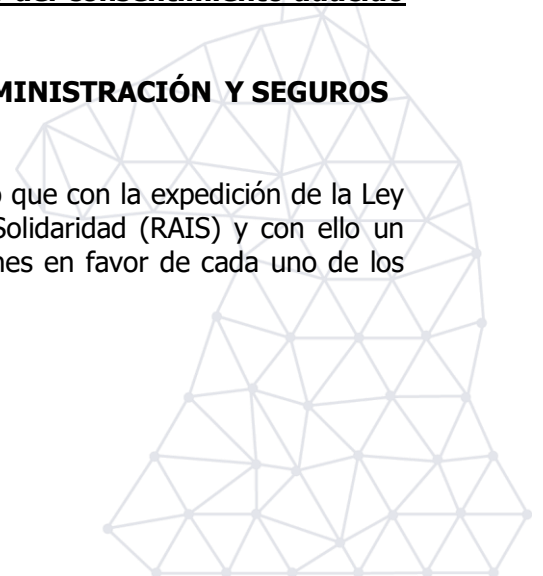
En este sentido, tenemos que en el presente caso no sería correcta la aplicación de los precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia sobre inversión de la carga de la prueba sobre nulidades o ineficacias de traslado de régimen pensional y afiliación al RAIS, pues la jurisprudencia del alto tribunal ha sido clara en aplicar dicha inversión en casos en que el afiliado sufrió un “perjuicio actual evidente” al efectuar el traslado de regir, por estar renunciando a expectativas legítimas de derecho y derechos consolidados, situaciones que evidentemente no ocurrieron en el caso de la demandante al efectuar su traslado de régimen.

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que en el presente caso no es procedente la aplicación del precedente jurisprudencial que impone la inversión de la carga de la prueba en casos de nulidad de afiliación al RAIS, pues como se indicó, la demandante al momento del traslado inicial al RAIS, tenía tan solo meras expectativas de derecho pensionales a partir de las cotizaciones que hasta el momento había realizado al ISS, sin que existiera a su favor un derecho pensional consolidada, es más, la demandante ni tan si quiera tenía expectativas legítimas de derecho que la hubieren hecho acreedora del régimen de transición pensional al momento de su traslado. Por lo tanto, **no existe fundamento jurídico para que el juzgador imponga la inversión en la carga de la prueba respecto del vicio del consentimiento aducido en la demanda.**

13. IMPOSIBILIDAD DE REINTEGRAR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUROS PREVISIONAL.

Tal como se ha expuesto a largo del presente escrito, es claro que con la expedición de la Ley 100 de 1993 se crea el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y con ello un conjunto de obligaciones para las administradoras de pensiones en favor de cada uno de los afiliados a este subsistema.

Puntualmente, el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 señala:





B. "En el régimen de prima media con prestación definida el 10.5% del ingreso base de cotización se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. **El 3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes.**

En el régimen de ahorro individual con solidaridad el 10% del ingreso base de cotización se destinará a las cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del ingreso base de cotización se destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el **3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes**". (Se resalta fuera del texto).

Adicionalmente, el Decreto 692 de 1994 en su artículo 36 señala:

"ARTICULO 36. DISTRIBUCION DE LAS COTIZACIONES. La tasa de cotización para pensiones será a partir del 1 de enero de 1996 del 13.5% la cual se aplicará al ingreso base de cotización total será del 11.5% y a partir del 1 de enero de 1995 será del 12.5%. De la tasa de cotización total prevista tanto las administradoras del régimen de ahorro como del régimen de prima media deberán capitalizar en las cuentas de ahorro del afiliado en las reservas del fondo común según el caso los siguientes puntos porcentuales; el 8% en 1994 el 95 % en 1995 y el 10% a partir de 1996. El ISS y las cajas, fondos o entidades de previsión mientras no se ordene su liquidación deberán llevar cuentas separadas de las reservas para la pensión de vejez y de gastos de administración. En relación con los riesgos originados en las pensiones de invalidez y sobrevivientes podrá contraer los seguros respectivos o asumir el riesgo directamente. En uno u otro caso deberá llevar cuentas separadas de las primas canceladas o de, las reservas que debe constituir si asume el riesgo, según las normas que establezca la superintendencia bancaria".

De conformidad con las normas aludidas, se puede colegir que el tres por ciento (3%) de la cotización en ambos regímenes pensionales se destina a cubrir: (i) los gastos y/o comisión de administración y; (ii) el pago de la prima para los seguros de invalidez y sobrevivientes.

Correlativamente con la contraprestación mencionada se crean con una serie de obligaciones que deben cumplir las administradoras de pensiones, entre las cuales se encuentran las siguientes: (i) administrar la cuenta de ahorro individual del afiliado; (ii) garantizar una rentabilidad mínima de los fondos de pensiones; (iii) consolidar la historia laboral; (iv) ejercer la acción de cobro frente a las moras y; (v) garantizar que en caso de cumplirse con requisitos de pensión de sobrevivencia e invalidez se pueda financiar dicha prestación al afiliado y sus beneficiarios, entre otras.

Bajo este escenario, es relevante mencionar que si bien es cierto las pretensiones de la demanda giran en torno a la ineficacia/nulidad de la afiliación al RAIS y que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que la consecuencia de ésta, es el regreso automático de las cosas al estado inicial (SL 3464 de 2019); pues también lo es, que corresponde al Juez hacer un estudio de ponderación



objetiva en cuanto a las restituciones mutuas, la confianza legítima y la buena fe que ostenta SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A..

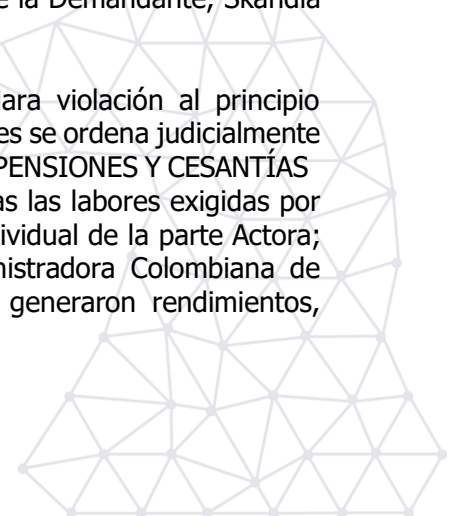
En primer lugar, se debe advertir que, **SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.** actuó de buena fe dentro de toda la relación contractual con la Demandante y administró en forma correcta la cuenta de ahorro individual del señor actor; por lo que resulta oportuno citar el siguiente aparte de la sentencia 25307 (10326) de la Corte Suprema de Justicia, con fecha 5 de agosto de 2014, con ponencia del magistrado Arturo Solarte, según el cual:

«Es patente, entonces, que el Tribunal erró en la interpretación del artículo 1746 del Código Civil y que, como consecuencia de tal yerro, no hizo actuar el artículo 964 ibídem, pues de no haber cometido tales desatinos, habría colegido que el aquí demandado, al ser poseedor de buena fe, como esa misma Corporación lo calificó en su propio fallo, apreciación fáctica que al no estar comprendida en la acusación no puede ser revisada por la Corte, estaba obligado a **restituir únicamente los frutos percibidos con posterioridad a la notificación del auto admisorio de la demanda, porque sólo a partir de este momento quedaba sometido al régimen que para (...)»** (Se resalta).

En segundo lugar; y como su nombre lo indica, la comisión de administración está direccionada a retribuir las diferentes actividades que deben desarrollar las instituciones pensionales que conforman el Sistema General de Pensiones, entre las cuales se encuentra **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**; luego dicha comisión no es del afiliado y no está destinada a la financiación de la pensión de vejez, porque tanto en el RAIS como en el RPM, la ley dispone dicho porcentaje a favor de las administradoras de pensiones, y si esto es así, ordenar que se devuelva el porcentaje de comisión de administración es generar un enriquecimiento sin justa causa a favor de COLPENSIONES (o del destinatario de esa devolución) y un pago de lo no debido, pues esta última nunca realizó la función de administración conforme lo dispone la ley.

Finalmente, está acreditado con las pruebas documentales adjuntas a la contestación de la demanda que SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. cumplió con generar una rentabilidad acorde con las directrices legales y de la Superintendencia Financiera. **Más aún, si se tiene en cuenta que la rentabilidad generada por SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. excede la rentabilidad mínima ordenada en el artículo 101 de la Ley 100 de 1993.** Por lo anterior, no resulta procedente reintegrar la comisión de administración, cuando en el ejercicio legítimo de las obligaciones legales vigentes durante la vinculación de la Demandante, Skandia Pensiones y Cesantías S.A. cumplió con cada una de ellas.

De esta forma, ordenar el reintegro de dicha comisión es una clara violación al principio constitucional de buena fe, confianza legítima y al Debido Proceso pues se ordena judicialmente devolver una suma que tiene un titular definido legalmente. SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. llevó a cabo la administración de dichos recursos, así como todas las labores exigidas por la Ley respecto de los dineros contenidos en la Cuenta de ahorro Individual de la parte Actora; razón por la cual no es viable devolver dichas sumas a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, más aún cuando dichos dineros ya generaron rendimientos, beneficiando al Afiliado directamente.





Ahora bien, en lo que respecta a la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia tampoco es procedente que Skandia Pensiones y Cesantías deba asumirlas, en tanto la causa de aseguramiento (invalidez y sobrevivencia) es permanente y la Demandante goza de cobertura durante toda la vinculación al fondo de pensiones obligatoria de Skandia Pensiones y Cesantías S.A., de ahí que parte del mencionado porcentaje, ya fue pagado a la aseguradora para cubrir los riesgos de invalidez y muerte del(a) actor(a) y, por tanto, no se encuentra en las arcas de la AFP, **afirmación que se ratifica con el concepto No. 2019152169-003-000 de fecha 15 de enero de 2020 de la Superintendencia Financiera**, que al respecto indicó:

garantía de la pensión mínima y sus respectivos rendimientos.

2. *¿Al decretarse la nulidad de la afiliación o ineficacia del traslado y ordenar la devolución de recursos, se deben respetar las restituciones mutuas y excluir las sumas que por concepto de prima de seguro previsional fueron sufragadas a favor del afiliado mientras estuvo vigente su afiliación, dado que la compañía aseguradora mantuvo la cobertura de los riesgos de invalidez y muerte de su asegurado durante la vigencia del seguro, y además por cuanto operó la figura de la prima devengada?*

En igual sentido, en atención a que el porcentaje de la prima del seguro previsional ya fue sufragado y la compañía aseguradora cumplió con su deber contractual de mantener la cobertura durante la vigencia de la póliza, este Despacho no considera viable el traslado de dichos recursos en el caso consultado; sin perjuicio de la vinculación que a este tipo de procesos se haga a las aseguradoras que han sido contratadas para dichos fines, para que puedan ejercer la defensa de sus intereses.

3. *Conforme al marco normativo vigente, ¿sería válido el siguiente tratamiento legal que han de recibir los aportes recibidos, cuando por virtud de la declaratoria judicial de nulidad de la afiliación o ineficacia del traslado, el afiliado debe retornar al RPM?*

Concepto	Devolución
Cuenta de Ahorro Individual (Aportes y Rendimientos)	Si
FGPM (aportes y rendimientos)	Si
Prima de Seguro Previsional	No
Comisión Administración	No

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 – 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co



El emprendimiento
es de todos

Ministerio de
Economía

En consecuencia, el dinero pagado a título de prima por un seguro obligatorio que ofrece cobertura a la Demandante no puede ser objeto de restitución, en cuanto se trata de un beneficio del que efectivamente goza la actora, y, de cualquier forma, tampoco puede ser exigido a mi representada, en cuanto ésta, según las prescripciones legales al respecto, lo pagó a título de contraprestación a la aseguradora que emitió el seguro previsional respectivo.

Por último, si bien es cierto el efecto de la declaratoria de ineficacia es restituir las cosas al estado al que estarían si no hubiese existido el acto o contrato correspondiente, existen excepciones que impiden la aplicación de tal disposición en sentido estricto, como por ejemplo, cuando no se puede retrotraer lo ejecutado por una de las partes, para el caso particular, como se dijo, el contrato de seguro celebrado entre la AFP y la aseguradora, del cual se benefició quien solicita la nulidad, pues gozó, se reitera, de la cobertura de los riesgos derivados de la invalidez y la muerte durante toda la vigencia con la AFP.

14. IMPROCEDENCIA DE INDEXACIÓN

De acuerdo con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia 00161 de mayo 13 de 2010, MP. Edgardo Villamil Portilla, la indexación consiste en "la actualización monetaria,

cuya aplicación deja por fuera aspectos subjetivos, pretende mantener en el tiempo el valor adquisitivo de la moneda oficial, que se envilece periódicamente en las economías caracterizadas por la inflación, todo bajo la idea de que el pago, sea cual fuere el origen de la prestación, debe ser íntegro, conforme a decantada jurisprudencia en materia de obligaciones indemnizatorias, que a la postre fue recogida por el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, el cual expone:

(...)

la indexación se remonta, según cada caso, al tiempo desde el cual se debe medir un valor determinado que, por efectos de justicia y equidad, ha de permanecer constante a pesar del irresistible paso del tiempo”.

Adicionalmente, a través de sentencia SL9316-2016 de fecha 29 de junio de 2016, se precisó que la indexación “es la simple actualización de la moneda para contrarrestar la devaluación de la misma por el transcurso del tiempo, dada la generalizada condición inflacionaria de la economía nacional”.

En consonancia con lo anterior; el artículo 101 de la Ley 100 de 1993 textualmente señala:

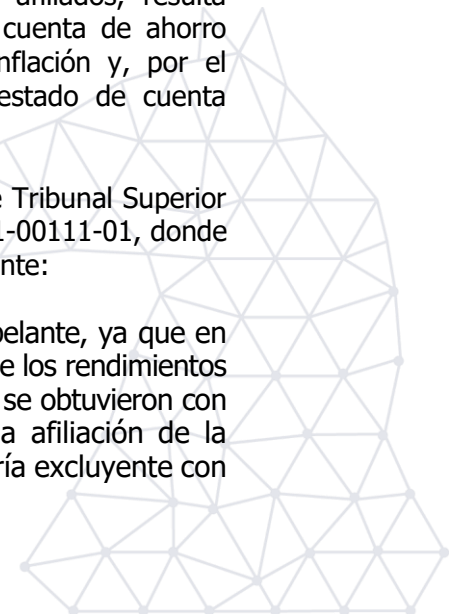
“ARTÍCULO 101. RENTABILIDAD MÍNIMA. <Artículo modificado por el artículo 52 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> La totalidad de los rendimientos obtenidos en el manejo de los Fondos de Pensiones, una vez aplicadas las comisiones por mejor desempeño a que haya lugar, será abonada en las cuentas de ahorro pensional individual de los afiliados, a prorrata de las sumas acumuladas en cada una de ellas y de la permanencia de las mismas durante el respectivo período.

Las sociedades administradoras de Fondos de Pensiones deberán garantizar a los afiliados una rentabilidad mínima de cada uno de los Fondos de Pensiones, la cual será determinada por el Gobierno Nacional”.

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que dentro de las obligaciones que deben cumplir las administradoras de pensiones, se encuentra la de garantizar una rentabilidad mínima en las cuentas de ahorro individual de sus afiliados, resulta incompatible ordenar indexación alguna, pues los recursos de la cuenta de ahorro individual del(a) Demandante no se han visto afectados por la inflación y, por el contrario, han generado rendimientos conforme se observa del estado de cuenta adjunta a la contestación de la demanda.

Refuerza el entendimiento anterior, lo conceptuado por el Honorable Tribunal Superior de Cundinamarca en la Sentencia de radicado 25899-31-05-002-2021-00111-01, donde al examinar un proceso parecido al caso de estudio concluye lo siguiente:

“Sobre el particular, se considera que le asiste razón a la apelante, ya que en este caso, como lo refiere, se está ordenando la devolución de los rendimientos financieros, rubro este que incluye los frutos e intereses que se obtuvieron con los dineros recibidos por la AFP como consecuencia de la afiliación de la demandante, por lo que entiende la Sala que este rubro sería excluyente con



la indexación ordenada, por lo que se revocará la decisión en este aspecto.”

I. EXCEPCIONES PREVIAS

A. FALTA DE JURISDICCIÓN O COMPETENCIA

Se presenta este medio exceptivo de acuerdo con lo señalado en el numeral 1° del artículo 100 de Código General del Proceso, en la medida en que lo pretendido por la parte actora es el reconocimiento y pago de perjuicios, consistente según el, en el mayor valor generado entre el valor de la mesada pensional reconocida en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el que le correspondería si hubiese estado en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

Lo anterior significa que lo pretendido por la actora mediante la interposición del presente pleito corresponde a una indemnización que no es de naturaleza laboral, y por ende la reclamación efectuada no corresponde a ninguna de las competencias que la ley atribuye a la jurisdicción ordinaria laboral de acuerdo con lo que prevé el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Así las cosas, y dada la naturaleza de la reclamación planteada en este proceso, la competencia para su conocimiento y trámite es de la jurisdicción civil, y así deberá declararse por parte de este despacho.

“ARTICULO 2o. COMPETENCIA GENERAL. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:

1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo.
2. Las acciones sobre fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral.
3. La suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical.
4. <Numeral modificado por del artículo 622 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos.
5. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad.

6. Los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive.
7. La ejecución de las multas impuestas a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje, por incumplimiento de las cuotas establecidas sobre el número de aprendices, dictadas conforme al numeral 13 del artículo 13 de la Ley 119 de 1994.
8. El recurso de anulación de laudos arbitrales.
9. El recurso de revisión.
10. <Numeral adicionado por el artículo 3 de la Ley 1210 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> La calificación de la suspensión o paro colectivo del trabajo”.

IV. EXCEPCIONES DE FONDO

1. PRESCRIPCIÓN

La legislación Colombiana ha determinado ciertos plazos en los que son exigibles los derechos a través de las acciones que el ordenamiento autoriza para tales fines. Así las cosas, una vez consumado dicho plazo, se pierde la oportunidad para discutir y hacer exigible uno u otro derecho.

En materia laboral, el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo determinó un término especial para la prescripción de las acciones. Frente a esto, la norma en comento establece:

"Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto." (He resaltado y subrayado)

Por su parte, el Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, en su artículo 151 expone:

"ARTICULO 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual". (He resaltado y subrayado).

Aunado a lo que antecede, si nos remitiéramos a los términos de prescripción establecidos en el Código General del Proceso, nos encontramos con que la presente acción fue incoada por fuera de tiempo, pues para obtener la nulidad de un negocio jurídico (en este caso el traslado de la actora al Régimen de Ahorro Individual) deben tenerse en cuenta las siguientes disposiciones normativas:

- i) En lo que se refiere a la nulidad absoluta, el artículo 1742 del Código Civil Colombiano, cuyo texto preceptúa:

"ARTICULO 1742. OBLIGACION DE DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; puede así mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley. Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria." (Se subraya fuera del texto)

En concordancia con lo expuesto, el artículo primero (1) de la ley 791 de 2002, frente a la prescripción determinó:

"Artículo 1º. Redúzcase a diez (10) años el término de todos las prescripciones veintenarias, establecidas en el Código Civil, tales como la extraordinaria adquisitiva

de dominio, la extintiva, la de petición de herencia, la de saneamiento de nulidades absolutas.”

Frente a la nulidad relativa, el artículo 1750 del Código Civil colombiano, cuyo tener establece:

“El plazo para pedir la rescisión durara cuatro años.

Este cuatrienio se contará, en el caso de violencia, desde el día en que ésta hubiere cesado; en el caso de error o de dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato. (...).” (Se subraya fuera del texto)

En conclusión, la posibilidad de declarar la nulidad de la afiliación al Régimen de Ahorro individual con Solidaridad (RAIS) se encuentra prescrita, ya sea por el plazo previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, o por el término establecido en el artículo 1750 del Código Civil Colombiano en caso de las nulidades relativas.

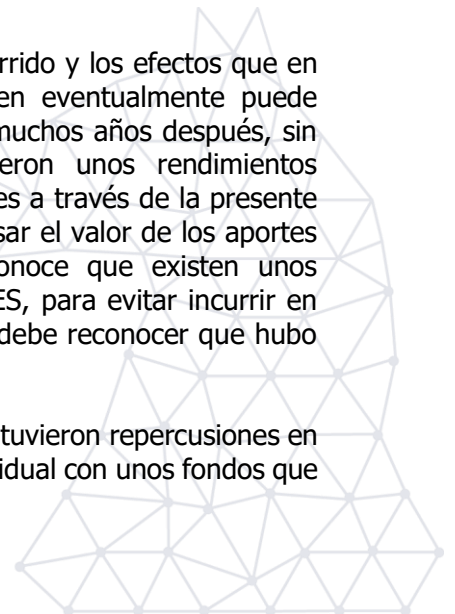
El término de prescripción de la acción debe contarse a partir del momento en que el afiliado adquiere la condición de pensionado en el RAIS, así lo ha considerado la CSJ, en sentencia SL 373 de 2021, al señalar “En la medida en el que el daño es perceptible o apreciable en toda su magnitud desde el momento en que se tiene la calidad de pensionado, el termino de prescripción debe iniciar a contar desde este momento.”

2. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVER LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PRESCRIPCIÓN DE ESTOS:

Si bien es cierto, no prescribe el derecho a la pensión, ni los aportes de los trabajadores, el valor de los gastos de administración no tiene esa misma naturaleza, pues son unos gastos de administración de una cuenta de ahorros, máxime cuando estos no engrosan las cuentas del afiliado que se traslada al RPM, porque al RPM no se llevan cuentas de ahorros, sino que estos dineros van a un fondo común; adicionalmente, es claro que COLPENSIONES no administró la cuenta de la demandante durante la permanencia de la parte actora en el RAIS, pero sí se va a beneficiar de los rendimientos financieros generados por los fondos del RAIS, los cuales van a ser utilizados por todos los colombianos afiliados a COLPENSIONES.

No puede perder de vista el juez, los hechos relevantes que han ocurrido y los efectos que en verdad se producen, porque hay que tener en cuenta que si bien eventualmente puede declararse la ineficacia del acto del traslado, esta ineficacia sucede muchos años después, sin embargo, mientras permaneció válida esta afiliación se produjeron unos rendimientos financieros y unos actos jurídicos a favor de la demandante, los cuales a través de la presente demanda se solicitan sean trasladados a COLPENSIONES para engrosar el valor de los aportes de la demandante; entonces, con el mismo racero que se reconoce que existen unos rendimientos financieros que deben ser trasladados a COLPENSIONES, para evitar incurrir en injusticia e inequidad que son principios de rango Constitucional, se debe reconocer que hubo unos gastos de administración que fueron legalmente descontados.

Y esto es porque hubo unos hechos en el mundo fenomenológico que tuvieron repercusiones en el mundo jurídico, por ejemplo, que existió una cuenta de ahorro individual con unos fondos que



produjeron unos rendimientos financieros, y tan verídica es su existencia, que a pesar de la declaratoria de ineficacia, se ordena el traslado de los rendimientos financieros a COLPENSIONES, pero de igual manera no se puede desconocer que las AFP administraron los fondos de la demandante durante muchos años y se los han hecho rendir frutos notables, lo cual no hubiera pasado en COLPENSIONES que solo puede invertir en bonos del tesoro.



Ahora bien, es claro que la financiación de los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín las primas de los seguros de invalidez y de sobrevivencia que corresponden a un 3%, son descontados por fuente legal y no por capricho de los fondos de pensiones, encontrando entonces su origen el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, la cual también dispone que el 1.5% le corresponde al Fondo de garantía de pensión mínima que es un fondo estatal, y se le obliga al fondo a devolver este valor que se lo queda la entidad del Estado que actúa bajo el principio de solidaridad y a esta no se le obliga a devolver esta suma de dinero.

3. BUENA FE

Sin que signifique reconocimiento alguno en favor de la parte Demandante, y de acuerdo con el artículo 83 de la Constitución Política, es preciso recordarle al Despacho que Skandia S.A siempre ha obrado de buena fe, atendiendo a las imposiciones normativas vigentes para cada momento de su actividad; motivo por el cual es improcedente imponer cualquier tipo de condena desfavorable para sus intereses.

4. COBRO DE NO LO DEBIDO POR INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN

Skandia S.A. no se encuentra en la obligación de acceder a las pretensiones de la demanda atendiendo a que no existe causa legal que las sustente. Lo anterior se fundamenta en que la afiliación de la Demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) se llevó a cabo atendiendo a las Disposiciones legales y reglamentarias que existían para ese momento.

Debe tenerse en cuenta nuevamente que Skandia S.A es una entidad proba y profesional, que ha cumplido desde su nacimiento con las disposiciones legales y reglamentarias que le han sido impuestas. Así las cosas, debe concluirse que mi representada, al haberse ceñido a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, no puede reconocer en favor de la parte actora derecho alguno con ocasión de la presente acción.

5. GENÉRICA

De la manera más cordial y respetuosa le solicito al Juez de instancia que en caso de que encuentre alguna excepción no formulada dentro del presente escrito, y que surja con en el desarrollo del proceso, la misma sea observada y decretada en favor de mi representada.

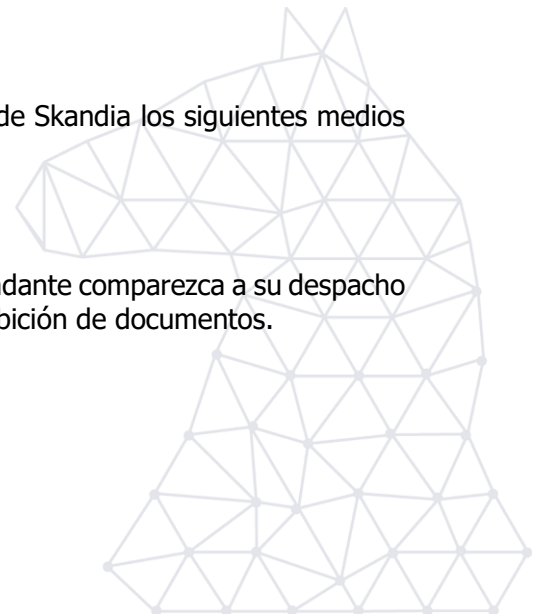
V. PRUEBAS

Se solicita a la Señora Juez se decreten y se tengan en favor de Skandia los siguientes medios de prueba:

1. INTERROGATORIO DE PARTE.

Solicito a la señora Juez que fije fecha y hora para que la demandante comparezca a su despacho a absolver el interrogatorio de parte que le formularé con exhibición de documentos.

2. DOCUMENTALES:





Se manifiesta al despacho que la documental allegada con el presente escrito corresponde a la totalidad de documentos que reposan en el archivo pensional de la afiliada.

1. Formulario de afiliación a Skandia.
2. Historia Laboral Consolidada.
3. Estado de cuenta.
4. Historial de vinculaciones SIAFP.
5. Certificación de pensionada.
6. Historial de pagos para pensioanda.
7. Concepto de la Superintendencia Financiera No. 2019152169-003-000 de fecha 15 de enero de 2020, en 8 folios.

VI. ANEXOS

Anexo a la presente contestación de demanda los siguientes documentos:

1. Copia de la escritura pública No. 721, por medio de la cual **SKANDIA S.A.** da poder a **GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.**
2. Copia simple del certificado de existencia y representación legal de **GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.**, en donde me encuentro inscrito como abogada.
3. Copia simple de cedula de ciudadanía de la suscrita y licencia temporal de la suscrita.
4. Los documentos relacionados en el respectivo acápite de pruebas.

VII. NOTIFICACIONES.

Las recibiré en la Secretaría del Juzgado, o en mi oficina ubicada en la Calle 84 A No. 10 -33 Piso 11 de la ciudad de Bogotá o al correo electrónico notificaciones@godoycordoba.com y dgomez@godoycordoba.com

VIII. TRASLADO A LAS DEMÁS PARTES.

En esta oportunidad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2213 de 2022 y en el numeral 14 del art. 78 del CGP, se remite el presente memorial con copia a las partes:

- Parte demandante:

procesos@tiradoescobar.com

Del Señor Juez,

DIANA ESPERANZA GÓMEZ FONSECA

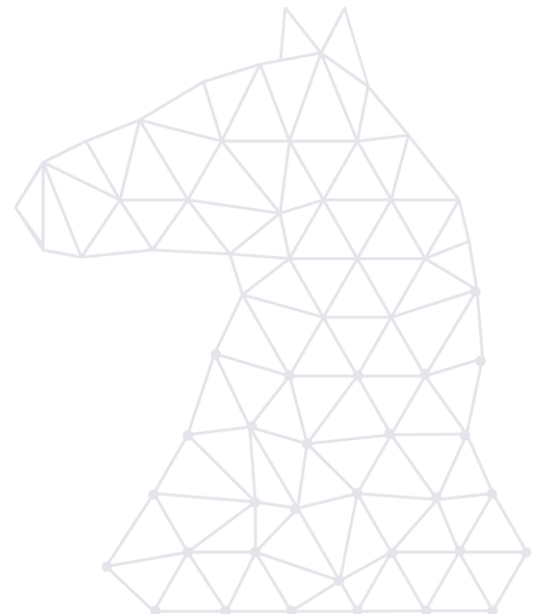
C.C. 1.023.967.512 de Bogotá D.C.

L.T. 30.201 del C. S de la J.

Correo electrónico: dgomez@godoycordoba.com

Av. Calle 84A # 10-33, Piso 11 | Bogotá D.C., Colombia

PBX: (57-1) 317 4628 | www.godoycordoba.com





NOTARIA CUARENTA Y TRES (43) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ.

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: 721 -----

NÚMERO: SETECIENTOS VEINTIUNO -----

FECHA DE OTORGAMIENTO: VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE DOS MIL VEINTE (2020) -----

CLASE DE ACTO: PODER GENERAL.-----

PODERDANTE:

SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.
con NIT. **800.148.514-2** Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales

SANDRA VIVIANA FONSECA CORREA. con C.C. No. **53.177.012.** -----

APODERADA:

GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.

N.I.T. 830.515.294-0-----

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, República de Colombia, a los veintitrés (23) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020), ante mí, **PATRICIA HERRERA REINA**, Notaria Cuarenta y Tres (43) *Encargada* de este Círculo nombrada mediante resolución número 5801 de fecha 30 de junio de 2020 expedida por la S.N.R, se otorgó la escritura pública que se consigna en los siguientes términos:-----

COMPARECIÓ: (con minuta por correo) SANDRA VIVIANA FONSECA CORREA, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliado en Bogotá, Departamento de Cundinamarca, identificada con cédula de ciudadanía número **53.177.012** expedida en Bogotá, quien obra en calidad de Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.** con NIT. **800.148.514-2**, con domicilio en Bogotá D.C., sociedad debidamente constituida por escritura pública número cuatro mil trescientos siete (4.307) de fecha seis (6) de diciembre de mil novecientos noventa y uno (1991) otorga en la Notaría treinta y cinco (35) de Bogotá, posteriormente modificada por instrumentos públicos debidamente inscritos, como se acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Superintendencia Financiera De Colombia, que se protocoliza con el presente instrumento, y manifiesto que confiero **PODER GENERAL, AMPLIO y SUFICIENTE**,

PATRICIA HERRERA REINA

Notaria 43 Esc. 335

SDC726623355

AKHGA8F98R3ITDOR

a la sociedad, denominada **GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.** con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., y con **NIT 830.515.294-0**, en la actualidad representada legalmente por la señora **VERÓNICA DIAZ DEL CASTILLO ROMÁN**, identificada con la cédula de ciudadanía **No. 52.698.501** y cuyo objeto social principal es la prestación de servicios de asesoría jurídica, para que en su calidad de **APODERADA** y a través de cualquiera de los abogados inscritos en el Certificado de Existencia y Representación Legal de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso represente y ejecute los siguientes actos en nombre de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**:

a) REPRESENTACIÓN: Para que ejerza la representación legal y judicial de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.** en las acciones judiciales o administrativas que esta entidad deba adelantar o que se adelanten en su contra ante cualquier entidad pública, privada o judicial y sus organismos vinculados o adscritos. En desarrollo de esta facultad podrá notificarse de todas las providencias judiciales o administrativas, presentar reclamaciones, derechos de petición, instaurar o contestar demandas en las que sea parte **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**, llamar en garantía, asistir a audiencias, absolver interrogatorios de parte, recibir, comprometer, presentar recursos y, en general, ostentará todas las facultades previstas en el artículo 77 del Código General del Proceso. -----b)

DESISTIMIENTOS Y RENUNCIAS: Para que desista de los procesos, reclamaciones o gestiones en que intervenga a nombre de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**, de los recursos que en ellos interponga y de los incidentes que se promuevan. -----

c) TRANSIGIR Y CONCILIAR: Para que transija y concilie pleitos y diferencias que ocurran respecto de los derechos y obligaciones de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.** conforme a las instrucciones dadas por el poderdante, además para que asista en calidad de representante legal de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.** a las audiencias de conciliación judiciales, con todas las facultades inherentes al



mandato establecidas en el artículo 77 del CGP, inclusive la de conciliar, conforme a las instrucciones dadas por el poderdante. _____

d) Las demás actuaciones que se requieran de manera que SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A se encuentre debidamente representado en los asuntos que trata el presente poder. —

EL(LA) COMPARECIENTE HACE CONSTAR QUE: 1.- Verificó cuidadosamente sus nombres y apellidos, los números de su documento de identidad y demás datos, y por lo tanto, aprueba este instrumento sin reserva alguna, en la forma como quedó redactado. 2.- Las declaraciones consignadas en este instrumento corresponden a la verdad y, en consecuencia, asume la responsabilidad de lo manifestado. 3.- Conocen la Ley y saben que el Notario responde únicamente de la regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los otorgantes, ni de la autenticidad de los documentos que formen parte del mismo. (Arts. 9 y 35 Decreto Ley 960/1970). LA NOTARÍA NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR ERRORES O INEXACTITUDES ESTABLECIDOS CON POSTERIORIDAD A LA FIRMA DE LOS OTORGANTES Y DEL NOTARIO. Las aclaraciones, modificaciones o correcciones que tuvieran que hacerse deberán ser subsanadas mediante el otorgamiento de una nueva escritura suscrita por quienes intervinieron en la inicial y sufragada por ellos mismos. (Art. 102 Decreto Ley 960/1970)._____

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN Hecho este instrumento por el compareciente, dio su asentimiento a todas y cada una de sus partes y al acto en general; fue advertido sobre las formalidades legales, lo aprobó y firmó ante mí y conmigo el Notario quien en esta forma lo autorizo y doy fe. _____

Esta escritura pública se extendió en las hojas de Papel Notarial de seguridad Nos.: SDO424569108 SDO624569107. _____

DERECHOS NOTARIALES (Resolución No. 1299 DE 2020)

DERECHOS NOTARIALES: \$ 61.700

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO \$6.600

FONDO NACIONAL DE NOTARIADO \$ 6.600 I.V.A: \$ 17.841

OTORGANTE:

[Signature]
SANDRA VIVIANA FONSECA CORREA C.C. No. 5819902 de Bogotá

Quien obra en calidad de Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales

SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

con NIT. 800.148.514-2 Dirección: N. 19 No. 11 A 30.

Teléfonos: 558 4300.

Actividad Económica: Abogada.

Correo Electrónico: cliente@skandia.com.co.

DATOS DE LA APODERADA: GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S. con N.I.T.
830.515.294-0

Dirección: Calle 82 N. 10 -33 Piso 5.

Teléfonos: 317 4628

Actividad Económica: Servicios Jurídicos.

Correo electrónico: agodoylegodoycordoba.com.

NOTARIA CUARENTA Y TRES (43) (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

[Signature]
PATRICIA HERRERA REINA

Radico: FS Elaboro: FS Liquidó: FS Tomo Firmas: FS Revisó:



SDC326623373

Notaria
43

Autenticación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Bogotá D.C., 2020-07-23 15:58:18 Documento: 64v8m

Ante mi el suscrito Notario Cuarenta y tres del Circulo de Bogotá D.C. comparecio:

FONSECA CORREA SANDRA VIVIANA

Identificado con C.C. 53177012

Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.



FOTO

160-63d64ff7

**NOTARÍA CUARENTA Y TRES DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ D.C.**



Notaria 43 Encargada

SDC326623373



QADJHL4SR1A0SNSE

04/05/2020

NOTARIA 43 DE BOGOTÁ D.C.
ESPACIO EN BLANCO
PROTOCOLO

NOTARIA 43 DE BOGOTÁ D.C.
ESPACIO EN BLANCO
PROTOCOLO



Es primera copia tomada de su original:
escritura pública N°. 321 de 23 de Julio 2020
que expidió y autorizó en 14 hojas útiles
con destino a: 61 afegante
Papel Art. 6°. Ley 20 de 1.976 27 JUL 2020
Bogotá D.C.

[Handwritten signature]



CERTIFICADO DE VIGENCIA
LA NOTARIA CUARENTA Y TRES (43)
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

QUE EN EL ORIGINAL DE LA ESCRITURA PÚBLICA A
QUE SE REFIERE LA PRESENTE COPIA NO APARECE
NOTA DE REVOCATORIA.

27 JUL 2020

DOY FE BOGOTÁ D.C.

[Handwritten signature]



Notaria 43 Encargada

SDC726622036



JXW8CSTSPAUCOA5Y

04/05/2020



SDC226623383

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20

Recibo No. AA20535814

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. SE HA EXTENDIDO LA FECHA LÍMITE PARA RENOVAR LA MATRÍCULA MERCANTIL HASTA EL 03 DE JULIO DE 2020.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: "GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S." SIN EMBARGO,
PARA SU IDENTIFICACION PUEDE UTILIZAR
SIMPLEMENTE LA CONTRACCION "GODOY CORDOBA
S.A.S."
Nit: 830.515.294-0 Administración : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01447565
Fecha de matrícula: 31 de enero de 2005
Último año renovado: 2019
Fecha de renovación: 29 de marzo de 2019
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Av Calle 82 N° 10 - 33 Piso 5
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: agodoy@godoycordoba.com
Teléfono comercial 1: 3174628
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Av Calle 82 N° 10 - 33 Piso 5
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: agodoy@godoycordoba.com
Teléfono para notificación 1: 3174628
Teléfono para notificación 2: No reportó.

PATRICIA HERRERA REINA
Notaria 43 Encargada

SDC226623383

IAR1LJ7PVLGNSR89

04/05/2020

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20

Recibo No. AA20535814

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0000138 del 25 de enero de 2005 de Notaría 61 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de enero de 2005, con el No. 00974508 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada GODOY CORDOBA ABOGADOS LIMITADA SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 013 del 28 de diciembre de 2009 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de enero de 2010, con el No. 01356856 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de GODOY CORDOBA ABOGADOS LIMITADA SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA LTDA a GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA S A S.

Por Acta No. 33 del 15 de enero de 2018 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de enero de 2018, con el No. 02297434 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA S A S a "GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S." SIN EMBARGO, PARA SU IDENTIFICACION PUEDE UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION "GODOY CORDOBA S.A.S.".

Que por Acta No. 013 de la Junta de Socios del 28 de diciembre de 2009, inscrita el 27 de enero de 2010 bajo el número 01356856 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad



SDCA20621352

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20
Recibo No. AA20535814
Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada S A S bajo el nombre de: GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S sin embargo para su identificación podrá utilizar simplemente la contracción GODOY CORDOBA S A S

Que por Acta No. 37 de la Asamblea de Accionistas, del 02 de noviembre de 2018, inscrita el 16 de Mayo de 2019 bajo el número 02466433 del libro IX, la sociedad de la referencia (absorbente) absorbe mediante fusión a la sociedad FRANCISCO BURITICA ABOGADOS CONSULTORES S.A.S. la cual se disuelve sin liquidarse.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto social principal la prestación de servicios de asesoría jurídica en las distintas disciplinas del derecho, así como la planeación y proyección de negocios a nivel nacional e internacional. En todo caso, la sociedad podrá, por sí misma o por intermedio o en asocio con terceros, desarrollar cualquier actividad lícita.

CAPITAL

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor	: \$10.000.000.000,00
No. de acciones	: 10.000.000,00
Valor nominal	: \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor	: \$152.683.000,00
No. de acciones	: 152.683,00
Valor nominal	: \$1.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20

Recibo No. AA20535814

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$152.683.000,00
No. de acciones : 152.683,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un gerente. El gerente ejercerá el cargo hasta cuando sea removido o reemplazado por la junta directiva de acuerdo con lo señalado en los estatutos. El gerente será el representante legal de la sociedad. El gerente de la sociedad tendrá tres (3) suplentes elegidos por la junta directiva, quienes reemplazarán al gerente en sus faltas temporales y en las definitivas hasta cuando la junta directiva nombre al sucesor o reemplazo del gerente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente tendrá en desarrollo del objeto social las siguientes funciones y atribuciones: A) Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que representen la sociedad cuando fuere el caso; B) Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva; C) Realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a realizar los fines de la sociedad; D) Nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad cuyo nombramiento no esté atribuido a la asamblea general de accionistas o a la junta directiva; E) Presentar oportunamente a la junta directiva el presupuesto de inversiones, ingresos y gastos que requiera la sociedad; F) Presentar a la junta directiva en tiempo oportuno, los estados financieros de propósito general individuales y consolidados cuando sea del caso, con sus notas, cortados al fin del respectivo ejercicio junto con los documentos que señale la ley y el informe de gestión, así como el informe especial cuando se dé la configuración de un grupo empresarial, todo lo cual se presentará conjuntamente por los administradores a la asamblea general de accionistas; G) Al igual que los demás administradores, deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio dentro del mes siguiente a la fecha en la



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

SDC626623381

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20

Recibo No. AA20535814

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

cual se retire de su cargo y cuando se las exija el órgano que sea competente para ello. Para tal efecto, se presentarán los estados financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestión; H) Cumplir los demás deberes que le señalen los reglamentos de la sociedad y los que le corresponden por el cargo que ejerce y particularmente velar por que a través de la sociedad o en la prestación de los servicios que constituyen su objeto social principal no fluyan o pasen dineros de origen ilícito; I) Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatutos; J) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad; K) Velar porque los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la asamblea general de accionistas o junta directiva las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular. Esta función se cumplirá dentro de los parámetros de la estructura de la sociedad y teniendo en cuenta las funciones y procedimientos asignados a otros funcionarios de la sociedad, como cabezas de área; L) Convocar a la asamblea general de accionistas a sesiones ordinarias, y a las extraordinarias siempre que lo crea conveniente o cuando le corresponda de acuerdo con lo previsto en estos estatutos y en la ley; M) Las demás que le asignen la ley y estos estatutos. Parágrafo.- No obstante lo anterior, en cualquier caso y para desarrollar o ejercer cualquiera de sus funciones, el gerente requerirá la previa autorización de la junta directiva para celebrar cualquier acto o contrato a nombre de la sociedad, cuando la cuantía del acto o contrato o de las obligaciones a cargo de la sociedad de manera individual o a través de una serie de operaciones relacionadas exceda el equivalente en pesos colombianos a mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (1000 SMMLV) a la fecha de celebración del acto o contrato, o de la última operación en el caso de operaciones relacionadas. Parágrafo. - Los suplentes del gerente tendrán las mismas facultades otorgadas al gerente (incluida la facultad de representación legal de la sociedad) y no existirá para su actuación, un orden de prioridad entre los suplentes del gerente. Cuando en estos estatutos se haga referencia al gerente, se entenderá que se hace referencia también, en lo aplicable, a los suplentes del gerente. Los suplentes no requerirán acreditar, para su actuación, la configuración de una falta temporal o absoluta del gerente. Bastará con su actuación para que se presuma la falta temporal o absoluta del gerente.

Notaría 43 Encargada

SDC626623381

7UDDPT4N80CM3YCX

04/05/2020

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20

Recibo No. AA20535814

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Que por Documento Privado No. Sin Núm del 08 de marzo de 2019 registrado el 9 de Marzo de 2019 bajo el No. 02433332 del libro IX de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso fueron inscritos como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Guerrero Orbe Diego Alexander	c.c. 1.018.426.052	222.814
Barros Cardenas Jhon Alex	c.c. 1.043.015.010	287.301

CERTIFICA:

Que por Documento Privado No. Sin Núm del Representante Legal, del 9 de julio de 2019, registrado el 17 de Julio de 2019 bajo el número 02487223 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Vergel Ramirez Laura	c.c. 1.090.469.651	321.394
Rey Londoño Oscar Alberto	c.c. 1.140.866.487	300.858

CERTIFICA:

Que por Documento Privado No. Sin Núm del Representante Legal, del 2 de octubre de 2019, registrado el 23 de Octubre de 2019 bajo el número 02517724 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Ana Maria Rodriguez Marmolejo	c.c. 1.151.946.356	253.718
Carolina Martinez Pelaez	c.c. 1.037.612.591	252.761
Gabriela Restrepo Caicedo	c.c. 1.144.193.395	307.837
John Jairo Rodriguez Bernal	c.c. 1.070.967.487	325.589
Juan Sebastian Sanchez Amaya	c.c. 1.022.398.006	310.573
Luis Miguel Diaz Reyes	c.c. 1.018.464.896	331.655
Maria Alejandra Serrano Ceballos	c.c. 1.144.084.440	325.295
Omar Alonso Camargo Mercado	c.c. 1.043.010.907	285.256
Paula Andrea Arboleda Villa	c.c. 1.152.201.387	270.475
Jorge Andres Sanchez Rodriguez	c.c. 1.013.641.075	278.768

CERTIFICA:

Que por Documento Privado Sin Núm del Representante Legal del 27 de diciembre de 2019, registrado el 27 de Diciembre de 2019 bajo el número 02537409 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).



SDC826623380

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20

Recibo No. AA20535814

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre: Chavez Alvarado Andres Felipe Identificación: T.P
c.c. 1.075.655.441 232007

CERTIFICA:

Que por Documento Privado No. Sin Núm del 28 de febrero de 2020, registrado el 2 de Marzo de 2020 bajo el número 02559054 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Bernal García Federico	c.c. 80.873.156	175488
Lara Marquez Amarante Andrea	c.e. 527.443	283576
Benrey Zorro Juliana	c.c. 1.072.642.954	190673
Duarte Villalobos Irene	c.c. 1.020.744.847	273878
Carrasco Boshell Brigitte Natalia	c.c. 1.121.914.728	288455
Cano Gonzalez Claudia Andrea	c.c. 1.143.869.669	338180

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Mediante Acta No. 15 del 26 de marzo de 2012, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de abril de 2012 con el No. 01626132 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Godoy Cordoba Andres Dario	C.C. No. 000000080086521
Primer Suplente Del Gerente	Godoy Fajardo Carlos Hernan	C.C. No. 000000019251626

Mediante Acta No. 22 del 11 de agosto de 2016, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de agosto de 2016 con el No. 02132210 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo	Diaz Del Castillo	C.C. No. 000000052698501

Notaria A3 Encargada
SDC826623380



IYSPHKDBY2ZX2EDA

04/05/2020

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20
 Recibo No. AA20535814
 Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Suplente Del Roman Veronica
 Gerente

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Godoy Fajardo Carlos	C.C. No. 000000019251
Segundo Renglon	Hernan Mendoza	C.C. No. 000000019431
Tercer Renglon	Gnecco Gustavo Jose	C.C. No. 000000080086
	Godoy Cordoba Andres	
	Dario	

SUPLENTES CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	SIN DESIGNACION	*****

Mediante Acta No. 31 del 17 de noviembre de 2017, de Asamblea Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de noviembre de 2017 con el No. 02278076 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Godoy Fajardo Carlos	C.C. No. 000000019251
	Hernan	
Tercer Renglon	Godoy Cordoba Andres	C.C. No. 000000080086
	Dario	

SUPLENTES CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	SIN DESIGNACION	*****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20
Recibo No. AA20535814
Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Mediante Acta No. 36 del 1 de junio de 2018, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de junio de 2018
con el No. 02347445 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Segundo Renglon	Gnecco Mendoza	C.C. No. 000000019431641
	Gustavo Jose	

REVISORES FISCALES

Mediante Acta No. 14 del 27 de marzo de 2014, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de abril de 2014
con el No. 01825090 del Libro IX, se designó a:

CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Revisor Fiscal	Perez Echeverry	C.C. No. 000000031150288
	Socorro	

PODERES

Que por documento privado No. Sin núm del Representante Legal, del 22
de noviembre de 2018, registrado el 23 de noviembre de 2018 bajo el
número 00040473 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 del
Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s)
judicial(es) y extrajudicial(es).

NOMBRE:

ANA CRISTINA MEDINA GONZÁLEZ

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 52.991.736

NOMBRE:

CARLOS HERNÁN GODOY FAJARDO

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 19.251.626

NOMBRE:

FRANCISCO ERNEY BURITICÁ RUIZ

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 10.529.620

NOMBRE:

IDENTIFICACIÓN:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20
Recibo No. AA20535814
Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ANDRÉS FERNANDO DA COSTA HERRERA

C.C. 80.505.099

NOMBRE:
GUSTAVO GNECCO MENDOZA

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 19.431.641

NOMBRE:
SANTIAGO ANDRÉS MARTÍNEZ MÉNDEZ

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 81.717.493

NOMBRE:
MARÍA ISABEL VINASCO LOZANO

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 53.006.455

NOMBRE:
JHON SEBASTIÁN MOLINA GÓMEZ

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 1.018.466.887

NOMBRE:
SERGIO ANDRÉS CAMPOS GUZMÁN

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 1.015.433.588

NOMBRE:
DIANA LUCIA SAAVEDRA CASTAÑEDA

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 1.026.579.845

NOMBRE:
JOSÉ DAVID OCHOA SANABRIA

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 1.010.214.095

NOMBRE:
CESAR AUGUSTO ORJUELA CÁCERES

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 80.793.573

NOMBRE:
JOHANA ALEXANDRA DUARTE HERRERA

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 53.077.146

NOMBRE:
YAT SING CHÍA MUÑOZ

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 1.018.445.390

NOMBRE:
JENNIFER LORENA MOLINA MESA

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 1.129.511.816

NOMBRE:
DANIEL MAURICIO CONTRERAS JAIMES

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 1.090.424.399

NOMBRE:
ÁNGELA MARÍA MORA PARRA

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 1.020.780.646

NOMBRE:

IDENTIFICACIÓN:



SDC226623378

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20
Recibo No. AA20535814
Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

FABIO ANDRÉS SALAZAR RESLEN

C.C. 1.032.358.377

NOMBRE:

IDENTIFICACIÓN:

RICARDO JOSÉ AGUIRRE BEJARANO

C.C. 1.018.442.942

NOMBRE:

IDENTIFICACIÓN:

ERNESTO ROSALES JARAMILLO

C.C. 1.090.420.262

NOMBRE:

IDENTIFICACIÓN:

JUAN SEBASTIÁN VELANDIA PÁRRAGA

C.C. 1.018.456.181

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO

INSCRIPCIÓN

E. P. No. 0002230 del 26 de junio de 2007 de la Notaría 21 de Bogotá D.C.

01147130 del 26 de julio de 2007 del Libro IX

Acta No. 013 del 28 de diciembre de 2009 de la Junta de Socios

01356856 del 27 de enero de 2010 del Libro IX

Acta No. 24 del 11 de abril de 2016 de la Asamblea de Accionistas

02099420 del 2 de mayo de 2016 del Libro IX

Acta No. 33 del 15 de enero de 2018 de la Asamblea de Accionistas

02297434 del 30 de enero de 2018 del Libro IX

Acta No. 37 del 2 de noviembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas

02466433 del 16 de mayo de 2019 del Libro IX

Acta No. 39 del 13 de diciembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas

02407938 del 21 de diciembre de 2018 del Libro IX

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6910

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20

Recibo No. AA20535814

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación Distrital son informativos:

Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección Distrital de Impuestos, fecha de inscripción : 31 de enero de 2005.

Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 2 de marzo de 2020.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.00 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 52 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

NOTARIA DE BOGOTÁ D.C.
ESPACIO EN BLANCO
PROTOCOLO

NOTARIA DE BOGOTÁ D.C.
ESPACIO EN BLANCO
PROTOCOLO

Certificado Generado con el Pin No: 8407146422535612

Generado el 05 de julio de 2020 a las 18:02:20

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**



EL SECRETARIO GENERAL

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el numeral 10 del artículo 11.2.1.4.59 del Decreto 848 del 15 de noviembre del 2016.

CERTIFICA

RAZÓN SOCIAL: SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.,
PUDIENDO EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL UTILIZAR LA SIGLA: SKANDIA PENSIONES
CESANTIAS S.A.

NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad Comercial Anónima De Carácter Privado. Entidad sometida al control y
vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 4307 del 06 de diciembre de 1991 de la Notaría 35 de
BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Bajo la denominación ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y DE
CESANTIAS SKANDIA S.A.

Escritura Pública No 1007 del 10 de marzo de 1993 de la Notaría 35 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió
su razón social por SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.,
pudiendo utilizar en el desarrollo de su objeto social la abreviación ASKANDIA S.A.

Escritura Pública No 511 del 02 de febrero de 1998 de la Notaría 18 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió
su razón social por SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

Escritura Pública No 6394 del 21 de diciembre de 1998 de la Notaría 18 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Se
protocolizó el acuerdo de fusión mediante el cual, SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
PENSIONES Y CESANTIAS absorbe a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PENSIONAR
S.A. Sigla: PENSIONAR, quedando esta última disuelta sin liquidarse.

Escritura Pública No 3361 del 19 de diciembre de 2013 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).
modifica su razón social de SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.,
por el de OLD MUTUAL SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.,
pudiendo en el desarrollo de su objeto social utilizar las siglas OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y
CESANTIAS S.A. ó SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

Escritura Pública No 1323 del 13 de junio de 2014 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). , modifica
su razón social de OLD MUTUAL SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS S.A., pudiendo en el desarrollo de su objeto social utilizar las siglas OLD MUTUAL SKANDIA
PENSIONES Y CESANTIAS S.A. ó SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A., por la de OLD MUTUAL -
SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., pudiendo usar las siglas
OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS S.A., OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A. ó
SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

Escritura Pública No 2413 del 03 de octubre de 2014 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). ,
modifica su razón social de OLD MUTUAL - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS S.A., pudiendo usar las siglas OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS S.A., OLD MUTUAL
SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A. ó SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A., por la de OLD
MUTUAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A. pudiendo usar la sigla OLD
MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

Escritura Pública No 570 del 03 de abril de 2019 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). , modifica
su razón social de OLD MUTUAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.
pudiendo usar la sigla OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS S.A. por la de SKANDIA
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., pudiendo en el desarrollo de su

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co

Página 1 de 5



El emprendimiento
es de todos

Matrícula

SDC626623376



ZOS1UZ5THTROBQGL

La validez de este documento puede verificarse en el sitio web de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Certificado Generado con el Pin No: 8407146422535612

Generado el 05 de julio de 2020 a las 18:02:20

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

objeto social utilizar las siglas SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., o OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. Escritura Pública No 2498 del 16 de diciembre de 2019 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. modifica su razón social de SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., pudiendo en el desarrollo de su objeto social utilizar las siglas SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., o OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., por SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., o OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., para el desarrollo de su objeto social utilizar la sigla SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 4754 del 02 de diciembre de 1991 Resolución S.B. 4754 del 12 de diciembre de 1991 Esta entidad autorizó a la citada sociedad para las actividades comprendidas dentro de su objeto social, esto es, la administración de Fondos de Cesantía, acto a partir del cual administra el FONDO DE CESANTÍAS. Resolución S.B. 2484 del 22 de diciembre de 1998 Esta entidad autorizó a la citada sociedad para fondos de pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

REPRESENTACIÓN LEGAL: La Representación Legal de la Sociedad estará a cargo de un Presidente y un Representante Legal para Asuntos Jurisdiccionales, si la Junta Directiva considera necesario por último cargo. Tanto el Presidente como el Representante Legal para Asuntos Jurisdiccionales serán miembros de la Junta Directiva y ser reelegidos indefinidamente. El Presidente de la Sociedad tendrá Suplentes: Primero (1°), Segundo (2°) y Tercero (3°) quienes en su orden ocuparán la Presidencia de la Sociedad en los casos de faltas absolutas temporales o accidentales del titular. Por su parte el Representante Legal para Asuntos Jurisdiccionales, si este cargo se provee, podrá tener, si la Junta Directiva lo considera necesario, un suplente que lo reemplazará en el caso de faltas absolutas, temporales o accidentales. Entenderá que la representación legal de la sociedad es múltiple. **FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD:** El Presidente tendrá todas las facultades y obligaciones propias de la naturaleza del cargo, especialmente las siguientes: a) Ser Representante Legal de la Sociedad ante los Accionistas, ante todas las autoridades de orden administrativo y jurisdiccional; b) Ejecutar u ordenar todas las operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes, en estos estatutos y en las decisiones de la Junta Directiva; c) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, conjuntamente con la Junta Directiva, un Balance General de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la Sociedad, un detalle completo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y un Proyecto de Distribución de Utilidades; d) Tomar todas las medidas que reclame la conservación y seguridad de los bienes sociales, de los patrimonios que administre, vigilar la actividad de los empleados de la Sociedad y emitir las órdenes e instrucciones que exija el normal desarrollo de la empresa social; e) Convocar la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario o conveniente y hacer las convocatorias de los (sic) Fondos de Pensiones; f) Convocar a la Junta Directiva a reuniones ordinarias o extraordinarias cuando lo considere necesario o conveniente y mantener informado a tal organismo del curso de los asuntos sociales; g) Presentar a la Junta Directiva el Balance del ejercicio y suministrar todos los informes que solicite en relación con la Sociedad y sus actividades; h) Cumplir órdenes e instrucciones que le imponga la Asamblea General y la Junta Directiva; i) Delegar parcialmente sus funciones y constituir los apoderados en la autorización previa de la Junta Directiva; j) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente los requisitos exigencias que se relacionen con la existencia, funcionamiento y actividades de la Sociedad y sus administraciones y manejo que constituyen el objeto social; k) Celebrar los contratos relativos a los fondos que administre la Sociedad de conformidad con las disposiciones legales aplicables y los reglamentos que para ese efecto se expidan; m) Proteger y defender los patrimonios de los fondos que administra. n) Nombrar y remover a los empleados que requiera el buen funcionamiento de la Sociedad.

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Commutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co



El emprendimiento
es de todos

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co

Certificado Generado con el Pin No: 8407146422535612

Generado el 05 de julio de 2020 a las 18:02:20

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**



SDC826623375

ociedad, debiendo obtener la autorización de la Junta Directiva en aquellos casos en que ésta determine el requisito; ñ) Obtener autorización de la Junta Directiva para aquellos actos o contratos que lo requieran de acuerdo con estos estatutos o las propias determinaciones de la Junta Directiva; p) Disponer la apertura o cierre de sucursales o agencias de la sociedad, dentro o fuera del territorio nacional. PARÁGRAFO: Los actos o contratos que la Sociedad deba ejecutar o desarrollar como personera de los fondos de pensiones que administre, serán celebrados, ejecutados y desarrollados por el Presidente de la Sociedad, ateniéndose únicamente a las previsiones, limitaciones y estipulaciones de los reglamentos de cada fondo en particular. PARÁGRAFO: Los actos o contratos que la Sociedad deba ejecutar o desarrollar como personera de los fondos de pensiones que administre, serán celebrados, ejecutados y desarrollados por el Presidente de la Sociedad, ateniéndose únicamente a las previsiones, limitaciones y estipulaciones de los reglamentos de cada fondo en particular. **FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES:** El Representante Legal de la Sociedad ante las autoridades de la Rama Jurisdiccional del Poder Público ante autoridades públicas o privadas a las cuales les hayan sido asignadas, delegadas o transferidas, por disposición normativa funciones jurisdiccionales o funciones que en algún momento fueron competencia de funcionarios de la Rama Jurisdiccional del Poder Público, b) Asesorar al Presidente para la designación de los poderados especiales que Representen a la Sociedad ante las autoridades mencionadas en el literal anterior.) Todas aquellas que el Presidente le delegue. PARÁGRAFO: En desarrollo de las facultades del literal a) anterior, el Representante Legal para asuntos Jurisdiccionales podrá suscribir los documentos que requiera para el debido cumplimiento de su cargo, tales como derechos de petición, tutelas, oficios, memoriales, poderes, sustituciones, entre otros. (Escritura Pública 3361 del 19 de diciembre de 2013 Notaria 43 de Bogotá). Mediante acta 217 del 24 de mayo de 2012 la Junta Directiva estableció la limitación a las facultades del Representante legal de la entidad de la siguiente forma: El Presidente podrá celebrar todos los actos y/o contratos, de carácter nacional e internacional, comprendidos en el objeto social de la sociedad y necesarios para que ésta desarrolle plenamente sus fines, pero someterá de manera previa a la aprobación de la junta directiva todo acto y/o contrato que exceda del equivalente en Pesos Colombianos de Quinientos Mil (500.000) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. De tal limitación se excluyen expresamente los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de las actividades relacionadas con las inversiones de recursos propios de conformidad con la política de inversión del capital de las compañías; o de terceros según el mandato de inversión contenido en la ley, en los reglamentos o en los contratos de cada producto; así como el cumplimiento de transacciones de cualquier tipo originadas en el cumplimiento de tales inversiones o de mandatos de los clientes; así como cualquier acto o contrato, sin importar su cuantía, por medio del cual la sociedad actúe como prestadora de servicios o proveedora de bienes en desarrollo de su objeto social principal. Para los efectos de la presente limitación, la cuantía del contrato se fijará según el valor total establecido en el acto o contrato en un periodo de un año; si este no estuviere estipulado, fuere variable o no estuviera determinado en la elaboración o suscripción del acto o contrato, la cuantía corresponderá al valor que resulte de sumar todos los pagos, instalamentos, comisiones y/o ingresos que se deban percibir o se deban pagar en un periodo de un año. Si el acto o contrato tuvieran una duración inferior a un año, la regla anterior se aplicará en forma proporcional (oficio 2012067008). Mediante acta 224 del 19 de diciembre de 2012 la Junta Directiva aprobó una adición a las limitaciones ya registradas en las facultades del Representante legal de la entidad de la siguiente forma: De tal limitación se excluyen expresamente los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de las actividades relacionadas con las inversiones de recursos propios de conformidad con la política de inversión del capital de las compañías; o de terceros según el mandato de inversión contenido en la ley, en los reglamentos o en los contratos de cada producto; así como el cumplimiento de transacciones de cualquier tipo originadas en el cumplimiento de tales inversiones o de mandatos de los clientes; así como cualquier acto o contrato, sin importar su cuantía, por medio del cual la sociedad actúe como prestadora de servicios o proveedora de bienes en desarrollo de su objeto social principal. Adicionalmente, se exceptiona de esta limitación a todos los actos y/o contratos que sean necesarios para cumplir o atender requerimientos legales o regulatorios y de regulación prudencial, tales como margen de solvencia, inversiones forzosas, capital y reservas de cualquier tipo. Para los efectos de la presente limitación, la cuantía del contrato se fijará según el valor total establecido en el acto o contrato en un periodo de un año; si este no estuviere estipulado, fuere variable o no estuviera determinado en la elaboración o suscripción del acto o contrato, la cuantía corresponderá al valor que resulte de sumar todos los pagos, instalamentos, comisiones y/o ingresos que se deban percibir o se deban pagar en un periodo de un año. Si el acto o contrato tuvieran una duración inferior a

SDC826623375

NL94KOMF7NEKNV8C

04/05/2020

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Commutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co

Página 3 de 5



**El emprendimiento
es de todos**

Certificado Generado con el Pin No: 8407146422535612

Generado el 05 de julio de 2020 a las 18:02:20

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

un año, la regla anterior se aplicará en forma proporcional. (oficio 2013004163).

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Santiago García Martínez Fecha de inicio del cargo: 14/04/2016	CC - 79945537	Presidente
Juan Daniel Frias Díaz Fecha de inicio del cargo: 07/07/2016	CC - 79942019	Primer Suplente del Presidente
Eduardo Duque Dubón Fecha de inicio del cargo: 07/09/2012	CC - 89000114	Segundo Suplente del Presidente
Fernando Augusto Medina Rojas Fecha de inicio del cargo: 20/10/2016	CC - 79382181	Tercer Suplente del Presidente (Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, con información radicada con el número 2019130790-000 del día 18 de septiembre de 2019, que con documento del 14 de junio de 2019 renunció al cargo de Tercer Suplente del Presidente y fue aceptada por la Junta Directiva en Acta 307 del 21 de agosto de 2019. Lo anterior de conformidad con los efectos establecidos por la Sentencia C-621 de julio 29 de 2003 de la Constitucional).
Maria Isabel Villa Ramírez Fecha de inicio del cargo: 13/06/2013	CC - 43505702	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales
Jorge Emilio Pacheco Monroy Fecha de inicio del cargo: 09/02/2016	CC - 80041243	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales
Daniela García Campos Fecha de inicio del cargo: 05/09/2019	CC - 1019096074	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales
Javier León Veloza Fecha de inicio del cargo: 13/06/2013	CC - 3190261	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales
Patricia Hurtado Cardona Fecha de inicio del cargo: 13/06/2013	CC - 31976756	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales
Ana Lucía Echeverri Botero Fecha de inicio del cargo: 11/01/2018	CC - 43273189	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales
Angelica María Izquierdo Beltrán Fecha de inicio del cargo: 04/10/2018	CC - 38558164	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales
Diego Alejandro Rodríguez Ramírez Fecha de inicio del cargo: 18/06/2019	CC - 1020786332	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales
-Sandra Viviana Fonseca Correa Fecha de inicio del cargo: 22/05/2017	CC - 53177012	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
 Conmutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co



Certificado Generado con el Pin No: 8407146422535612

Generado el 05 de julio de 2020 a las 18:02:20

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN



SDC126623374

MÓNICA ANDRADE VALENCIA
SECRETARIO GENERAL

De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto
tiene plena validez para todos los efectos legales."

Notaria Encargada

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Commutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co



El emprendimiento
es de todos

Mónica Andrade Valencia

NOTARIAS DE BOGOTÁ D.C.
ESPACIO EN BLANCO
PROTOCOLO

NOTARIAS DE BOGOTÁ D.C.
ESPACIO EN BLANCO
PROTOCOLO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:****NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.
Sigla: GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.
Nit: 830515294 0 Administración : Dirección Seccional
De Impuestos De Bogotá, Régimen Común
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01447565
Fecha de matrícula: 31 de enero de 2005
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 84A #10-33 Piso 5
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: pagos@godoycordoba.com
Teléfono comercial 1: 3174628
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 84A #10-33 Piso 5
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: notificaciones@godoycordoba.com
Teléfono para notificación 1: 3174628
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54**

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo.**CONSTITUCIÓN**

Por Escritura Pública No. 0000138 del 25 de enero de 2005 de Notaría 61 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de enero de 2005, con el No. 00974508 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada GODOY CORDOBA ABOGADOS LIMITADA SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 013 de la Junta de Socios del 28 de diciembre de 2009, inscrita el 27 de enero de 2010 bajo el número 01356856 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada S A S bajo el nombre de: GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S sin embargo para su identificación podrá utilizar simplemente la contracción GODOY CORDOBA S A S

Por Acta No. 013 del 28 de diciembre de 2009 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de enero de 2010, con el No. 01356856 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de GODOY CORDOBA ABOGADOS LIMITADA SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA LTDA a GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA S A S.

Por Acta No. 33 del 15 de enero de 2018 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de enero de 2018, con el No. 02297434 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA S A S a "GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S." SIN EMBARGO, PARA SU IDENTIFICACION PUEDE UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION "GODOY CORDOBA S.A.S.".

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 37 de la Asamblea de Accionistas, del 02 de noviembre de 2018, inscrita el 16 de Mayo de 2019 bajo el número 02466433 del libro IX, la sociedad de la referencia (absorbente) absorbe mediante fusión a la sociedad FRANCISCO BURITICA ABOGADOS CONSULTORES S.A.S. la cual se disuelve sin liquidarse.

Por Acta No. 58 del 19 de julio de 2022 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de julio de 2022, con el No. 02862790 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de "GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S." SIN EMBARGO, PARA SU IDENTIFICACION PUEDE UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION "GODOY CORDOBA S.A.S." a GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S. y adicionó la(s) sigla(s) GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S..

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad podrá, por sí misma o por intermedio o en asocio con terceros, desarrollar cualquier actividad lícita. De manera particular, pero sin limitarse a ello, la Sociedad tiene por objeto social la prestación de servicios de asesoría jurídica en las distintas disciplinas del derecho, así como la planeación y proyección de negocios a nivel nacional e internacional. Así mismo, la Sociedad puede dedicarse a la prestación de servicios integrales en prevención de riesgos laborales, promoción y prevención de la salud, asesorías y capacitaciones en las siguientes áreas con profesionales competentes y licencia en salud y seguridad en el trabajo vigente: legal, medicina preventiva y del trabajo, medicina del deporte, nutrición deportiva y ocupacional, fisioterapia, psicología, auditoría, ingeniería, entre otras. Así mismo, podrá prestar servicios integrales para todas las actividades de asesoría en diseño, implementación y mantenimiento de sistemas integrados de gestión en Seguridad y salud en el trabajo. También podrá llevar a cabo las demás actividades y servicios que de acuerdo con la legislación vigente en riesgos laborales, se deban diseñar e

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

implementar a nivel empresarial en organizaciones de cualquier sector empresarial ya sea del sector público o privado, entre otras. La Sociedad también podrá poseer y administrar establecimientos de comercio, así como celebrar cualquier tipo de operaciones sobre los mismos, y en general, estará facultada para realizar actividades de importación y exportación de bienes y servicios.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$10.000.000.000,00
No. de acciones : 10.000.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$219.412.000,00
No. de acciones : 219.412,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$219.412.000,00
No. de acciones : 219.412,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un gerente. El gerente ejercerá el cargo hasta cuando sea removido o reemplazado por la Junta Directiva de acuerdo con lo señalado en los estatutos. El gerente será el representante legal de la sociedad. El gerente de la sociedad tendrá tres (3) suplentes elegidos por la Junta Directiva, quienes reemplazarán al gerente en sus faltas temporales y en las definitivas hasta cuando la Junta Directiva nombre al sucesor o reemplazo del gerente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54**

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El gerente tendrá en desarrollo del objeto social las siguientes funciones y atribuciones: A) Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que representen la sociedad cuando fuere el caso; B) Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General De accionistas y de la Junta Directiva; C) Realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a realizar los fines de la sociedad; D) Nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad cuyo nombramiento no esté atribuido a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva; E) Presentar oportunamente a consideración de la Junta Directiva el presupuesto de inversiones, ingresos y gastos que requiera la sociedad; F) Presentar a la Junta Directiva en tiempo oportuno, los estados financieros de propósito general individuales y consolidados cuando sea del caso, con sus notas, cortados al fin del respectivo ejercicio junto con los documentos que señale la ley y el informe de gestión, así como el especial cuando se dé la configuración de un grupo empresarial, todo lo cual se presentará conjuntamente por los administradores a la Asamblea General de Accionistas; G) Al igual que los demás administradores, deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retire de su cargo y cuando se las exija el órgano que sea competente para ello. Para tal efecto, se presentarán los estados financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestión; H) Cumplir los demás deberes que le señalen los reglamentos de la sociedad y los que le corresponden por el cargo que ejerce y particularmente velar por que a través de la sociedad o en la prestación de los servicios que constituyen su objeto social principal no fluyan o pasen dineros de origen ilícito; I) Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatutos; J) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad; K) Velar porque los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea General de Accionistas o Junta Directiva las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular. Esta función se cumplirá dentro de los parámetros de la estructura de la sociedad y teniendo en cuenta las funciones y procedimientos asignados a otros funcionarios de la sociedad, como cabezas de área; L) Convocar a la asamblea general de accionistas a sesiones ordinarias, y a las extraordinarias siempre que lo crea conveniente o cuando le corresponda de acuerdo con lo previsto en estos estatutos y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

en la ley; M) Las demás que le asignen la ley y estos estatutos. Parágrafo.- No obstante lo anterior, en cualquier caso y para desarrollar o ejercer cualquiera de sus funciones, el gerente requerirá la previa autorización de la Junta Directiva para celebrar cualquier acto o contrato a nombre de la sociedad, cuando la cuantía del acto o contrato o de las obligaciones a cargo de la sociedad de manera individual o a través de una serie de operaciones relacionadas- exceda el equivalente en pesos colombianos a mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (1000 SMMLV) a la fecha de celebración del acto o contrato, o de la última operación en el caso de operaciones relacionadas. Parágrafo. - Los suplentes del gerente tendrán las mismas facultades otorgadas al gerente (incluida la facultad de representación legal de la sociedad) y no existirá para su actuación, un orden de prioridad entre los suplentes del gerente. Cuando en estos estatutos se haga referencia al gerente, se entenderá que se hace referencia también, en lo aplicable, a los suplentes del gerente. Los suplentes no requerirán acreditar, para su actuación, la configuración de una falta temporal o absoluta del gerente. Bastará con su actuación para que se presuma la falta temporal o absoluta del gerente.

Por Documento Privado No. Sin Núm del 08 de marzo de 2019, registrado el 9 de Marzo de 2019 bajo el No. 02433332 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso fueron inscritos como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Barros Cardenas Jhon Alex	C.C. 1.043.015.010	287.301

Por Documento Privado No. Sin Núm del Representante Legal, del 5 de julio de 2019, registrado el 17 de Julio de 2019 bajo el número 02487223 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Rey Londoño Oscar Alberto	C.C. 1.140.866.487	300.858

Por Documento Privado No. Sin Núm del Representante Legal, del 22 de octubre de 2019, registrado el 23 de Octubre de 2019 bajo el número 02517724 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Ana Maria Rodriguez Marmolejo C.C.	1.151.946.356	253.718
John Jairo Rodriguez Bernal	C.C. 1.070.967.487	325.589
Omar Alonso Camargo Mercado	C.C. 1.043.010.907	285.256
Jorge Andres Sanchez Rodriguez	C.C. 1.013.641.075	278.768

Por Documento Privado Sin Núm del Representante Legal del 27 de diciembre de 2019, registrado el 27 de Diciembre de 2019 bajo el número 02537409 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Chavez Alvarado Andres Felipe	C.C. 1.075.655.441	232007

Por Documento Privado No. Sin Núm del 28 de febrero de 2020, registrado el 2 de Marzo de 2020 bajo el número 02559054 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Bernal García Federico	C.C. 80.873.156	175488
Benrey Zorro Juliana	C.C. 1.072.642.954	190673
Duarte Villalobos Irene	C.C. 1.020.744.847	273878
Carrasco Boshell Brigitte Natalia	C.C. 1.121.914.728	288455

Por Documento Privado Sin núm del Representante Legal, del 29 de julio de 2020, registrado el 30 de julio de 2020 bajo el número 02602260 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Viviel Gonzalez Jorge Enrique	C.C. 1.014.225.303	277.946

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 13 de agosto de 2020, registrado el 13 de agosto de 2020 bajo el número 02606331 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54**

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P:
Romero Méndez Andrés Felipe	C.C.1.019.080.336	286.638
Duque Duque Juan Antonio	C.C.80.085.295	138.464

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 03 de septiembre de 2020, registrado el 4 de septiembre de 2020 bajo el número 02612596 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P.
Puentes Cespedes Ana Carolina	C.C. 1.010.229.148	330105

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 25 de septiembre de 2020, registrado el 25 de septiembre de 2020 bajo el número 02619669 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	TP:
Palacio Varona Daniela	C.C. 1.019.132.452	353.307
Bejarano Rengifo Diana Marcela	C.C. 1.144.087.101	315.617

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 11 de febrero de 2021, registrado 4 de Marzo de 2021 bajo el número 02669512 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	TP:
Carlos Augusto Suarez Pinzón	C.C. 1.032.470.700	347.852
Miguel Alejandro Lombana Cuevas	C.C. 1.022.398.901	308.077
Deivid Alexander Rodriguez Ramirez	C.C. 1.233.690.042	LT25399
Natalia Alzate Garcia	C.C. 1.095.786.682	173.261
Sara Heshusius Sancho	C.C. 1.144.068.042	346.483
Youssef Norredine Amara Pachon	C.C. 1.019.069.334	311.472

Por Documento Privado Sin Núm. del 12 de mayo de 2021 del Representante Legal, registrado 27 de Mayo de 2021, bajo el número 02709540 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54**

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	TP:
Nicolás Eduardo Ramos Ramos	C.C. 1.018.469.231	365094
Daniel Andres Paz Erazo	C.C. 1.085.291.127	329936
Laura María Valderrama Medrano	C.C. 1.010.220.471	307507

Por Documento Privado sin num. del 18 de agosto de 2021, inscrito el 23 de Agosto de 2021 con el No. 02736169 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre	Identificación	Tarjeta Profesional
Miguel Angel Salazar	C.C. No. 1.019.128.867	347296
Cortes		
Michelle Valeria Mina	C.C. No. 1.234.195.459	359423
Marulanda		

Por Documento Privado del 16 de diciembre de 2021, inscrito el 18 de Diciembre de 2021 con el No. 02773873 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre	Identificación	Tarjeta Profesional
Angélica María Cure Muñoz	C.C. No. 1.140.887.921	369821
Paula Huertas Borda	C.C. No. 1.020.833.703	369744
María Alejandra Ramírez Olea	C.C. No. 1.152.225.557	359508

Por Documento Privado del 01 de julio de 2022, inscrito el 8 de Julio de 2022, con el No. 02856173 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Andres Felipe Duque Velásquez	C.C No. 1.053.772.677	221517

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54**

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Daniel Felipe Ramirez Sanchez	C.C No. 1.070.018.966	373906
Deivid Alexander Rodriguez Ramirez	C.C No. 1.233.690.042	378503
Manuel Rodrigo Jaimes Beltran	C.C No. 1.071.169.446	30272

Por Documento Privado del 22 de julio de 2022 , inscrito el 27 de Julio de 2022 con el No. 02862244 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Diana Camila Gaitan Hemelberg	C.C No. 1.019.123.311	334532
David Ricardo Rodriguez Preciado	C.C.No. 1.057.581.246	251947

Por Documento Privado del 23 de agosto de 2022 , inscrito el 26 de Agosto de 2022 con el No. 02872678 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Octavio Andrés Castillo Ocampo	C.C No. 1.017.267.151	380131
Stephany Obando Perea	C.C No. 1.107.080.046	361681
Diana Esperanza Gomez	C.C No. 1.023.697.512 LT 30201	
Lina María Varela Vélez	C.C No. 1.234.091.873	364597

Por Documento Privado del 04 de octubre de 2022, inscrito el 7 de Octubre de 2022 con el 02887434 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Andrea Juliana Hernández Rueda	C.C No. 1.098.751.528	295.390
Juliana Araque Quiroz	C.C No. 1.035.868274	293.693

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54**

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Documento Privado del 28 de noviembre de 2022, inscrito el 30 de Noviembre de 2022 con el No. 02904376 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
María Carolina Martinez Portillo	C.C No. 1.020.721.389	207.162
Gina Paola Espinosa Martinez	C.C No. 22.464.396 116.498-D1	
Karen Sofia Sanchez Gonzalez	C.C No. 1.152.454.659	383.959
Paola Andrea Aponte Lopez	C.C No. 1.144.089.950	387.090
Mariana Pérez Cuenca	C.C No. 1.020.824.515	367.191
Maria Clara Jaramillo Berrio	C.C No. 1.152.702.664	388.141
Daniel Francisco Gomez Cortes	C.C No. 1.019.133.337	389.914

Por Documento Privado del 20 de febrero de 2023, inscrito el 22 de Febrero de 2023 con el No. 02936798 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Brandon Camilo Archila Jaimes	C.C No. 1.098.817.164	361.004
Miguel Angel Cadena Miranda	C.C No. 1.020.792.591	380.420

Por Documento Privado del 30 de junio de 2023, inscrito el 5 de julio de 2023 con el No. 02993832 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Camila Soler Sánchez	C.C No. 1.014.290.875	352.159
Luis Eduardo Calderón Pastrana	C.C No. 1.004.155.816	406.112
Yudi Marcela Barajas Soto	C.C No. 1.098.762.996	303.201

Por Documento Privado del 22 de agosto de 2023, inscrito el 24 de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Agosto de 2023 con el No. 03010137 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Sharik Alejandra Mateus Diaz	C.C No. 1.010.240.279	403.554
Lorena Paola Castillo Soriano	C.C No. 1.032.505.290	404.442
Vanessa Gómez Quintero	C.C No. 1.032.509.355	409.053
Laura Camila Guanumen Piñeros	C.C No. 1.032.474.517	355.025
Sebastián Huertas Trujillo	C.C No. 1.020.844.303	399.622

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 15 del 26 de marzo de 2012, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de abril de 2012 con el No. 01626132 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Andres Dario Godoy Cordoba	C.C. No. 80086521

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Gerente	Carlos Hernan Fajardo	Godoy C.C. No. 19251626

Por Acta No. 67 del 3 de agosto de 2022, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de agosto de 2022 con el No. 02870110 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Suplente Del	Caroline Gonzalez	Fraser C.C. No. 1020796887

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Gerente**ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Santiago Andres	C.C. No. 81717493
	Martinez Mendez	
Segundo Renglon	Ana Cristina Medina	C.C. No. 52991736
	Gonzalez	
Tercer Renglon	Andres Dario Godoy	C.C. No. 80086521
	Cordoba	
Cuarto Renglon	Daniel Francisco	C.C. No. 80873703
	Buritica Cordoba	
Quinto Renglon	Juan Jose Uribe Lopez	C.C. No. 79445373

SUPLENTE

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Carlos Hernan Godoy	C.C. No. 19251626
	Fajardo	

Por Acta No. 31 del 17 de noviembre de 2017, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de noviembre de 2017 con el No. 02278076 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Tercer Renglon	Andres Dario Godoy	C.C. No. 80086521
	Cordoba	

Por Acta No. 41 del 3 de marzo de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de julio de 2020 con el No. 02582656 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Primer Renglon	Santiago Andres	C.C. No. 81717493
	Martinez Mendez	

Cuarto Renglon	Daniel Francisco	C.C. No. 80873703
	Buritica Cordoba	

SUPLENTE

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Carlos Hernan Godoy	C.C. No. 19251626
	Fajardo	

Por Acta No. 51 del 23 de agosto de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de septiembre de 2021 con el No. 02740441 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Quinto Renglon	Juan Jose Uribe Lopez	C.C. No. 79445373

Por Acta No. 65 del 15 de mayo de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de mayo de 2023 con el No. 02981566 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Renglon	Ana Cristina Medina	C.C. No. 52991736
	Gonzalez	

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 59 del 9 de noviembre de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de noviembre de 2022 con el No. 02901235 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Revisor Fiscal BAKER TILLY COLOMBIA N.I.T. No. 800249449 5
Persona LTDA
Juridica

Por Documento Privado del 11 de noviembre de 2022, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de noviembre de 2022 con el No. 02901236 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Nydia Jasmin Mora Torres	C.C. No. 1022334637 T.P. No. 165330-T
Revisor Fiscal Suplente	Erika Tatiana Castaño Cruz	C.C. No. 1026276146 T.P. No. 272902-T

PODERES

Por Documento Privado No. Sin núm del Representante Legal, del 22 de noviembre de 2018, registrado el 23 de noviembre de 2018 bajo el número 00040473 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Ana Cristina Medina González	C.C. 52.991.736

NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Carlos Hernán Godoy Fajardo	C.C. 19.251.626

NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Francisco Erney Buriticá Ruiz	C.C. 10.529.620

NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Andrés Fernando Da Costa Herrera	C.C. 80.505.099

NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Gustavo Gnecco Mendoza	C.C. 19.431.641

NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
---------	-----------------

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54**

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadosselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Santiago Andrés Martínez Méndez	C.C. 81.717.493
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
María Isabel Vinasco Lozano	C.C. 53.006.455
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Jhon Sebastián Molina Gómez	C.C. 1.018.466.887
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Sergio Andrés Campos Guzmán	C.C. 1.015.433.588
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
José David Ochoa Sanabria	C.C. 1.010.214.095
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Jennifer Lorena Molina Mesa	C.C. 1.129.511.816
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Daniel Mauricio Contreras Jaimes	C.C. 1.090.424.399
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Fabio Andrés Salazar Reslen	C.C. 1.032.358.377
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Ricardo José Aguirre Bejarano	C.C. 1.018.442.942
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Ernesto Rosales Jaramillo	C.C. 1.090.420.262
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Juan Sebastián Velandia Párraga	C.C. 1.018.456.181

Por Documento Privado del 25 de agosto de 2022, de Representante Legal, registrado en esta Cámara de Comercio el 14 de Septiembre de 2022, con el No. 00048142 del libro V, la persona jurídica confirió poder especial a Diana Carolina Soler, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.020.727.319, para que represente al Poderdante y actúe en su nombre en los diferentes temas relacionados con la administración, vinculación, contratación, afiliación, desvinculación, desafiliación y relevo de personal de la Sociedad. Específicamente, la Apoderada podrá desempeñar las siguientes funciones y todas aquellas directamente relacionadas con ellas o

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

necesarias para poderlas ejercer, sin que se extiendan a temas o materias sustancialmente distintas: (i) Preparar, firmar y presentar cualquier documento en los temas relacionados con la administración, contratación y relevo de personal de la Sociedad, incluyendo contratos de trabajo, de prestación de servicios, diligenciamiento de formularios y documentos de vinculación ante cualquier tipo de autoridad pública o privada relacionada con el sector de salud, de trabajo o de seguridad social; (ii) Representar a la Sociedad administrativa, judicial y extrajudicialmente ante los empleados, funcionarios, terceros y toda clase de autoridades públicas, judiciales y administrativas en los temas relacionados con la administración, vinculación, contratación, desvinculación, desafiliación y relevo de personal de la Sociedad; (iii) Notificarse personalmente de cualquier decisión proferida por las autoridades administrativas y judiciales en las cuales resulten involucrados de cualquier forma los intereses de la Sociedad en los temas referidos, presentar recursos, solicitar pruebas, responder y/o elevar peticiones frente a ellas.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0002230 del 26 de junio de 2007 de la Notaría 21 de Bogotá D.C.	01147130 del 26 de julio de 2007 del Libro IX
Acta No. 013 del 28 de diciembre de 2009 de la Junta de Socios	01356856 del 27 de enero de 2010 del Libro IX
Acta No. 24 del 11 de abril de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02099420 del 2 de mayo de 2016 del Libro IX
Acta No. 33 del 15 de enero de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02297434 del 30 de enero de 2018 del Libro IX
Acta No. 37 del 2 de noviembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02466433 del 16 de mayo de 2019 del Libro IX
Acta No. 39 del 13 de diciembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02407938 del 21 de diciembre de 2018 del Libro IX
Acta No. 41 del 3 de marzo de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02582655 del 2 de julio de 2020 del Libro IX
Acta No. 51 del 31 de enero de	02790542 del 9 de febrero de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

2022 de la Asamblea de Accionistas 2022 del Libro IX
Acta No. 58 del 19 de julio de 02862790 del 28 de julio de
2022 de la Asamblea de Accionistas 2022 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6910

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 60.705.863.638

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 6910

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54**

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS
Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA
LICENCIA TEMPORAL

RESOLUCIÓN LT30201

NOMBRES DIANA ESPERANZA
APELLIDOS GOMEZ FONSECA
CEDULA 1.023.967.512
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA



17/03/2022
FECHA DE
EXPEDICIÓN

13/12/2023
FECHA DE
VENCIMIENTO

MARTHA ESPERANZA CUEVAS MELÉNDEZ

Directora

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.023.967.512**

GOMEZ FONSECA

APELLIDOS

DIANA ESPERANZA

NOMBRES

Diana Gómez

FIRMA

